

**CONTESTACION DE DEMANDA, LUZ VICTORIA VAZQUEZ HERNANDEZ,  
15001310500320230016200**

DEFENSA COLPENSIONES <defensacolp.j3lct@gmail.com>

Vie 18/08/2023 2:13 PM

Para: Juzgado 03 Laboral - Boyacá - Tunja

<j03labtun@cendoj.ramajudicial.gov.co>; luzvictoria@zielcolombia.com

<luzvictoria@zielcolombia.com>; agalejo7@gmail.com <agalejo7@gmail.com>; Natalia Andrea Sepulveda

Ruiz <accioneslegales@proteccion.com.co>; jemartinez@colfondos.com.co <jemartinez@colfondos.com.co>

 2 archivos adjuntos (15 MB)

CONTESTACION, luz 2...pdf; expediente administrativo luz.rar;

Cordial Saludo

Actuando en mi calidad de apoderado Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo No. CSJBOYA20-50 del 16 de junio de 2020 y el acuerdo PCSJA20-11567 de 2020, de manera respetuosa remito los siguientes documentos :

1. Contestación de Demanda, anexos y sustitución de poder.
2. Carpeta Administrativa de la accionante.

Esto con el fin de que sean tenidos en cuenta por el despacho e incorporados dentro del proceso de la referencia

Así mismo expresó que se remite a la dirección de correo electrónico del apoderado de la demandante como demás partes procesales, por lo que se da por cumplido con lo previsto en el Decreto 806 de 2020.

POR FAVOR ACUSAR RECIBO

Atentamente:

**CARLOS JULIAN ROJAS CAMARGO**  
**CEL. 3106883690**



SEÑORES:

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA

E.S.D

Asunto: Contestación de Demanda Laboral de Primera Instancia

Radicado: 15001310500320230016200

Demandante: LUZ VICTORIA VAZQUEZ HERNANDEZ C.C. 51913 714

Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES Y OTROS

**CARLOS JULIAN ROJAS CAMARGO**, abogado en ejercicio, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, en calidad de apoderado sustituto de la firma **SOLUCIONES JURIDICAS DE LA COSTA S.A.S** representada legalmente por el Doctor **CARLOS RAFAEL PLATA MENDOZA**, identificado con C.C. 84.104.546, TP N° 107.775 del C.S. de la J., apoderado judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones - en adelante COLPENSIONES -, cordialmente solicito al Despacho reconocerme personería para actuar de acuerdo a la sustitución adjunta y estando dentro del término de la oportunidad procesal, de manera respetuosa me permito dar contestación a la demanda propuesta dentro del proceso de la referencia instaurado contra mi representada, para que mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada se absuelva a mi representada de todas y cada una de las pretensiones propuestas en la demanda y se condene en costas a la parte demandante.

#### **NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD DEMANDADA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y DOMICILIO**

La Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- es una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, cuyo objeto consiste en la administración estatal del régimen de prima media con prestación definida incluyendo la administración de los beneficios económicos periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005, de acuerdo con lo que establezca la ley que los desarrolle.

La representación legal la ejerce el Doctor **JAIME DUSSAN CALDERON**, identificado con la cédula de ciudadanía 12.102.957 quien obra en su calidad de presidente según acuerdo 012 de 2022 a partir del 23 de noviembre de 2022.

El domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., en la Carrera 10 No. 72-33 Torre B piso 11, número telefónico 2170100.

#### **A LOS HECHOS**

**AL 1.** ES CIERTO, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, que su poderdante nació el 5 de octubre de 1968, de acuerdo a las pruebas presentado con el traslado de la demanda.

**AL 2.** ES CIERTO, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, que su poderdante en la actualidad cuenta con 54 años de edad, de acuerdo a las pruebas presentado con el traslado de la demanda.

#### **AFILIACIÓN AL ISS**

**AL 3.** NO ME CONSTA, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que con las pruebas allegadas al proceso, no se observa ningún documento emitido por el Instituto de Seguro Social hoy Colpensiones que nos de certeza que la demandante se afilio en noviembre de 1993, por lo que nos abstendremos a lo que resulte probado.

**AFIRMACIONES O NEGATIVAS INDEFINIDAS :**

**AL 4.** ESTE NO ES UN HECHO, es una apreciación subjetiva que realiza el apoderado judicial de la parte demandante por lo que nos abstendremos a lo que resulte probado.

**AL 5.** PARCIALMENTE CIERTO, toda vez que desde la creación de los fondos de pensiones (Ley 100 de 1993 – Decreto 692 de 1994) la Ley consagro los lineamientos que regirían los regímenes RPM y RAIS, imponiendo además el deber a los afiliados de indagar sobre los fondos en donde se acumularían los aportes que los empleadores realicen durante su vida laboral, por ello se consagro “la selección del régimen pensional implica la aceptación de las condiciones propias de este para acceder a las prestaciones de invalidez, vejez o muerte”, endilgando claramente obligaciones reciprocas a las partes objeto de la relación fondo – cotizante.

**AL 6.** ESTE NO ES UN HECHO, es una apreciación subjetiva que realiza el apoderado judicial de la parte demandante por lo que nos abstendremos a lo que resulte probado.

**AL 7.** NO ME CONSTA, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que mi asistida no interviene en este proceso, por lo que deberá ser probado dentro del proceso.

**AL 8.** ESTE NO ES UN HECHO, es una apreciación subjetiva que realiza el apoderado judicial de la parte demandante por lo que nos abstendremos a lo que resulte probado.

**AL 9.** NO ME CONSTA, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que mi asistida no interviene en este proceso, por lo que deberá ser probado dentro del proceso por parte de AFP del regimen de ahorro individual, quien desvirtué tal afirmación.

**AL 10.** ESTE NO ES UN HECHO, es una apreciación subjetiva que realiza el apoderado judicial de la parte demandante por lo que nos abstendremos a lo que resulte probado.

**AL 11.** NO ES CIERTO, toda vez que ambos regímenes cuentan con la característica en común de cumplir con cierta densidad de semanas que se ven reflejados en los aportes para conformar un capital determinado que permita el reconocimiento del derecho pensional. Así mismo es de pleno conocimiento que la Ley 100 de 1993 señala “artículo 64. Requisitos para obtener la pensión de vejez. Los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, tendrán derecho a una pensión de vejez, a la edad que escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de esta Ley, reajustado anualmente según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE”.(Subrayado fuera del texto). Por lo que es un aspecto de público conocimiento y que no es admisible que un afiliado que no se percató durante su vida laboral, indagar sobre su posible derecho pensional, alegue una falta de información que siempre estuvo a su alcance.

**AL 12.** NO ME CONSTA, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que mi asistida no interviene en este proceso, por lo que deberá ser probado dentro del proceso por parte de AFP del regimen de ahorro individual, quien desvirtué tal afirmación.

**AL 13.** NO ME CONSTA, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que mi asistida no interviene en este proceso, por lo que deberá ser probado dentro del proceso por parte de AFP del regimen de ahorro individual, quien desvirtué tal afirmación.

## **HECHOS QUE GUARDAN RELACIÓN CON LA AFIRMACION A LA Aministradora DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS COLFONDOS**

**AL 14.** ES CIERTO, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, que su poderdante se afilio a Colfondos el 09 de abril del 1997, de acuerdo a las pruebas allegadas con la demanda.

**AL 15.** NO ES CIERTO, dado que el artículo 47 de la Ley 1328 de 2009 señala “En este régimen las administradoras ofrecerán diferentes Fondos de Pensiones, esquema “Multifondos”, para que los afiliados una vez informados elijan aquellos que se ajusten en mejor forma a sus edades y perfiles de riesgo, de manera que con una adecuada conformación de la cuenta individual y una eficiente gestión de los recursos por parte de la administradora, se procure el mejor retorno posible al final del periodo de acumulación de aportes o hasta cuando el afiliado y/o sus beneficiarios tengan derecho a la pensión bajo la modalidad de retiro programado, si es del caso.” Y atendiendo a que el señor EDUCARDO VEGA, solicito el formulario de traslado de régimen y afiliarse al sistema pensional del RAIS, lo suscribió una vez conto con la información del régimen por lo que en concordancia con el artículo 11 del Decreto 649 de 1994 “la selección del régimen pensional implica la aceptación de las condiciones propias de este para acceder a las prestaciones de invalidez, vejez o muerte”, es en este momento cuando se configuran los elementos de validez que irradian de legalidad el contrato suscrito.

**AL 16.** NO ME CONSTA, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que mi asistida no interviene en este proceso, por lo que deberá ser probado dentro del proceso por parte de AFP del regimen de ahorro individual, quien desvirtué tal afirmación.

**AL 17.** NO ES CIERTO, dado que el artículo 47 de la Ley 1328 de 2009 señala “En este régimen las administradoras ofrecerán diferentes Fondos de Pensiones, esquema “Multifondos”, para que los afiliados una vez informados elijan aquellos que se ajusten en mejor forma a sus edades y perfiles de riesgo, de manera que con una adecuada conformación de la cuenta individual y una eficiente gestión de los recursos por parte de la administradora, se procure el mejor retorno posible al final del periodo de acumulación de aportes o hasta cuando el afiliado y/o sus beneficiarios tengan derecho a la pensión bajo la modalidad de retiro programado, si es del caso.” Y atendiendo a que el señor EDUCARDO VEGA, solicito el formulario de traslado de régimen y afiliarse al sistema pensional del RAIS, lo suscribió una vez conto con la información del régimen por lo que en concordancia con el artículo 11 del Decreto 649 de 1994 “la selección del régimen pensional implica la aceptación de las condiciones propias de este para acceder a las prestaciones de invalidez, vejez o muerte”, es en este momento cuando se configuran los elementos de validez que irradian de legalidad el contrato suscrito.

**AL 18.** NO ME CONSTA, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que mi asistida no interviene en este proceso, por lo que deberá ser probado dentro del proceso por parte de AFP del regimen de ahorro individual, quien desvirtué tal afirmación.

**AL 19.** NO ME CONSTA, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que mi asistida no interviene en este proceso, por lo que deberá ser probado dentro del proceso por parte de AFP del regimen de ahorro individual, quien desvirtué tal afirmación.

**AL 20.** NO ME CONSTA, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que mi asistida no interviene en este proceso, por lo que deberá ser probado dentro del proceso por parte de AFP del regimen de ahorro individual, quien desvirtué o afirmé tal afirmación.

**AL 21.** NO ME CONSTA, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que mi asistida no interviene en este proceso, por lo que deberá ser probado dentro del proceso por parte de AFP del regimen de ahorro individual, quien desvirtué o afirmé tal afirmación.

**AL 22.** NO ME CONSTA, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que mi asistida no interviene en este proceso, por lo que deberá ser probado dentro del

proceso por parte de AFP del regimen de ahorro individual, quien desvirtué o afirmé tal afirmación.

**AL 23.** NO ME CONSTA, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que mi asistida no interviene en este proceso, por lo que deberá ser probado dentro del proceso por parte de AFP del regimen de ahorro individual, quien desvirtué o afirmé tal afirmación.

**AL 24.** NO ME CONSTA, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que mi asistida no interviene en este proceso, por lo que deberá ser probado dentro del proceso por parte de AFP del regimen de ahorro individual, quien desvirtué o afirmé tal afirmación.

**AL 25.** NO ME CONSTA, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que mi asistida no interviene en este proceso, por lo que deberá ser probado dentro del proceso por parte de AFP del regimen de ahorro individual, quien desvirtué o afirmé tal afirmación.

**AL 26.** NO ME CONSTA, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que mi asistida no interviene en este proceso, por lo que deberá ser probado dentro del proceso por parte de AFP del regimen de ahorro individual, quien desvirtué o afirmé tal afirmación.

**AL 27.** NO ME CONSTA, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que mi asistida no interviene en este proceso, por lo que deberá ser probado dentro del proceso por parte de AFP del regimen de ahorro individual, quien desvirtué o afirmé tal afirmación.

**AL 28.** NO ME CONSTA, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que mi asistida no interviene en este proceso, por lo que deberá ser probado dentro del proceso por parte de AFP del regimen de ahorro individual, quien desvirtué o afirmé tal afirmación.

**AL 29.** ES CIERTO, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, que su poderdante el día 18 de mayo de 2023 presentó ante Colfondos una solicitud solicitando la anulación del traslado, de acuerdo con las pruebas presentada con el traslado de la demanda.

**AL 30.** ES CIERTO, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, que su poderdante el día 18 de mayo de 2023 presentó ante Colfondos un derecho de petición solicitando las pruebas de la información suministrada al momento de la afiliación y la proyección de pensión en él RAIS, de acuerdo con las pruebas presentada con el traslado de la demanda.

**AL 31.** NO ES CIERTO, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que con las pruebas allegada con el traslado de la demanda se observa respuesta al derecho de petición en fecha 19 mayo de 2023, por parte de Asofondos.

#### **HECHOS QUE GUARDAN RELACIÓN CON LA AFILIACION A LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN S.A.**

**AL 32.** ES CIERTO, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, que su poderdante el día 25 de febrero de 2004, se afilio al Fondo de Pensiones y Cesantías PROTECCION, de acuerdo con las pruebas presentada con el traslado de la demanda.

**AL 33.** NO ME CONSTA, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que mi asistida no interviene en este proceso, por lo que deberá ser probado dentro del proceso por parte de AFP del regimen de ahorro individual, quien desvirtué o afirmé tal afirmación.

**AL 34.** NO ME CONSTA, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que mi asistida no interviene en este proceso, por lo que deberá ser probado dentro del proceso por parte de AFP del regimen de ahorro individual, quien desvirtué o afirmé tal afirmación.

**AL 35.** NO ES CIERTO, dado que el artículo 47 de la Ley 1328 de 2009 señala “En este régimen las administradoras ofrecerán diferentes Fondos de Pensiones, esquema “Multifondos”, para que los afiliados una vez informados elijan aquellos que se ajusten en mejor forma a sus edades y perfiles de riesgo, de manera que con una adecuada conformación de la cuenta individual y una eficiente gestión de los recursos por parte de la administradora, se procure el mejor retorno posible al final del periodo de acumulación de aportes o hasta cuando el afiliado y/o sus beneficiarios tengan derecho a la pensión bajo la modalidad de retiro programado, si es del caso.” Y atendiendo a que la señora LUZ VASQUEZ HERNANDEZ, solicito el formulario de traslado de régimen y afiliarse al sistema pensional del RAIS, lo suscribió una vez conto con la información del régimen por lo que en concordancia con el artículo 11 del Decreto 649 de 1994 “la selección del régimen pensional implica la aceptación de las condiciones propias de este para acceder a las prestaciones de invalidez, vejez o muerte”, es en este momento cuando se configuran los elementos de validez que irradian de legalidad el contrato suscrito.

**AL 36.** NO ME CONSTA, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que mi asistida no interviene en este proceso, por lo que deberá ser probado dentro del proceso por parte de AFP del regimen de ahorro individual, quien desvirtué o afirmé tal afirmación.

**AL 37.** NO ME CONSTA, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que mi asistida no interviene en este proceso, por lo que deberá ser probado dentro del proceso por parte de AFP del regimen de ahorro individual, quien desvirtué o afirmé tal afirmación.

**AL 38.** NO ME CONSTA, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que mi asistida no interviene en este proceso, por lo que deberá ser probado dentro del proceso por parte de AFP del regimen de ahorro individual, quien desvirtué o afirmé tal afirmación.

**AL 39.** NO ME CONSTA, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que mi asistida no interviene en este proceso, por lo que deberá ser probado dentro del proceso por parte de AFP del regimen de ahorro individual, quien desvirtué o afirmé tal afirmación.

**AL 40.** NO ME CONSTA, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que mi asistida no interviene en este proceso, por lo que deberá ser probado dentro del proceso por parte de AFP del regimen de ahorro individual, quien desvirtué o afirmé tal afirmación.

**AL 41.** NO ME CONSTA, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que mi asistida no interviene en este proceso, por lo que deberá ser probado dentro del proceso por parte de AFP del regimen de ahorro individual, quien desvirtué o afirmé tal afirmación.

**AL 42.** NO ME CONSTA, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que mi asistida no interviene en este proceso, por lo que deberá ser probado dentro del proceso por parte de AFP del regimen de ahorro individual, quien desvirtué o afirmé tal afirmación.

**AL 43.** NO ME CONSTA, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que mi asistida no interviene en este proceso, por lo que deberá ser probado dentro del proceso por parte de AFP del regimen de ahorro individual, quien desvirtué o afirmé tal afirmación.

**AL 44.** NO ME CONSTA, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que mi asistida no interviene en este proceso, por lo que deberá ser probado dentro del proceso por parte de AFP del regimen de ahorro individual, quien desvirtué o afirmé tal afirmación.

**AL 45.** NO ME CONSTA, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que mi asistida no interviene en este proceso, por lo que deberá ser probado dentro del proceso por parte de AFP del regimen de ahorro individual, quien desvirtué o afirmé tal afirmación.

**AL 46.** NO ME CONSTA, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que mi asistida no interviene en este proceso, por lo que deberá ser probado dentro del proceso por parte de AFP del regimen de ahorro individual, quien desvirtué o afirmé tal afirmación.

**AL 47.** NO ME CONSTA, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, toda vez que mi asistida no interviene en este proceso, por lo que deberá ser probado dentro del proceso por parte de AFP del regimen de ahorro individual, quien desvirtué o afirmé tal afirmación.

**AL 48.** ES CIERTO, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, que su poderdante el día 18 de mayo de 2023 presentó ante PROTECCION una solicitud solicitando la anulación del traslado, de acuerdo con las pruebas presentada con el traslado de la demanda.

**AL 49.** ES CIERTO, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, que su poderdante el día 18 de mayo de 2023 presentó ante PROTECCION un derecho de petición solicitando las pruebas de la información suministrada al momento de la afiliación y la proyección de pensión en el RAIS, de acuerdo con las pruebas presentada con el traslado de la demanda.

**AL 50.** ES CIERTO, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, que su poderdante recibio respuesta el día 18 de mayo de 2023 por parte de PROTECCION, de acuerdo con las pruebas presentada con el traslado de la demanda.

#### **AGOTAMIENTO RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVO ANTE COLPENSIONES**

**AL 51.** ES CIERTO, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, que su poderdante el día 24 de mayo de 2023 presentó ante Colpensiones un derecho de petición solicitando la anulación de la afiliación al RAIS, de acuerdo con las pruebas presentada con el traslado de la demanda.

**AL 52.** ES CIERTO, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, que el día 24 de mayo de 2023, se agotó la reclamación administrativa, de acuerdo con las pruebas presentada con el traslado de la demanda.

**AL 53.** ES CIERTO, lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, que mi asistida dio respuesta el día 25 mayo de 2023, de acuerdo con las pruebas presentada con el traslado de la demanda.

#### **A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA**

En mi condición de apoderado judicial de la entidad ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - **COLPENSIONES**, manifiesto que me opongo a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de la demanda por carecer de fundamentos de orden legal y fáctico legal en contra de mi representada.

De manera particular por lo siguiente:

**FRENTE A LA PRETENSION PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA :** Me opongo a las pretensiones encaminadas a declarar la nulidad y/o ineficacia de la afiliación realizada por el accionante LUZ VICTORIA VASQUEZ HERNANDEZ, del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

En primera medida se tiene que existe legalidad en la afiliación al Régimen de Ahorro Individual, teniendo en cuenta que el mismo se realizó con plena voluntad del cotizante, quien por decisión propia solicitó el traslado suscribiendo el formulario la vinculación a la A.F.P Colfondos el 09 de abril del año de 1997, posteriormente realiza traslado a PROTECCION S.A el día 02 de febrero de 2004, Por tanto, debe señalarse que tales afiliaciones fueron totalmente válidas, puesto que no se configuraron vicios de consentimiento en la suscripción de la afiliación, vicios que se estipulan en el artículo 1109 del código civil, los cuales son: error, dolo, violencia, lesión o incapacidad al momento de suscribir en un primer momento el formulario de traslado a PROTECCION S.A. a la que actualmente se encuentra vinculado y cotizante.

Así mismo, se encuentra acreditado que la parte actora suscribió los referidos formularios de afiliación de manera libre, espontánea y voluntaria, situación que acredita que no existió nulidad alguna que en este momento se pretende hacer valer, como quiera que si la parte demandante no estaba conforme con los lineamientos del RAIS ésta debió afiliarse en el Régimen de Prima Media administrado por COLPENSIONES, pero en contrario sensu, LUZ VASQUEZ HERNANDEZ, permaneció en dicho régimen en las AFP mencionadas situación que conlleva a presumir que la parte actora contaba con la información necesaria sobre las condiciones, características, modalidades y desventajas del régimen que gobernaría su futuro derecho pensional como se evidencia, puesto que no obra prueba dentro del acervo que permita inferir lo contrario, confirmando así su voluntad de permanencia en el RAIS, al decidir continuar afiliada al mismo por más de 26 años, acatando y sometándose a las consecuencias o manejo de sus aportes al arbitrio del Régimen de Ahorro Individual y de las AFP referida.

Por su parte el Decreto 692 de 1994 en su artículo 11 establece que la selección del régimen pensional implica la aceptación de las condiciones propias de este para acceder a las prestaciones de invalidez, vejez o muerte. Señala la norma anterior, los requisitos de forma que debe contener el formulario que se debe diligenciar para adelantar el proceso de vinculación con la respectiva administradora. Y finalmente, establece que cuando el afiliado que se traslade por vez primera del RPM al RAIS, en el formulario deberá consignarse que la decisión de trasladarse al régimen seleccionado se ha tomado de manera libre, espontánea, sin presiones y además autoriza la norma a que el formulario contenga leyenda impresa en este sentido. Requisitos que se acreditan en el formulario de afiliación suscrito por la parte accionante, razón por la que se encuentran acreditados los requisitos de validez del acto jurídico de traslado de régimen.

Aunado a lo anterior debe tenerse en cuenta que la regulación legal que fundamenta el RAIS se encuentra plasmada en la ley de la Seguridad Social a partir del artículo 59, norma que debe conocer toda persona del territorio nacional, misma que no debe ser desconocida por cuanto el desconocimiento de la norma no exime de responsabilidad alguna, lo que se traduce al artículo 1159 del Código Civil, puesto que no se configuraría un error de derecho, pues la norma es expresa al prescribir los lineamientos y funcionamientos tanto del RAIS, como del RPM.

En concordancia con lo expuesto se encuentra que el accionante no solo tenía el deber de conocer la norma de carácter nacional que regula el régimen pensional, sino que adicionalmente tenía deberes como consumidor financiero del Sistema General de Pensiones, al respecto señala el Artículo 2.6.10.1.4 del Decreto 2550 de 2010 (Artículo 4 del Decreto 2241 de 2010). En lo referente a los deberes los siguientes:



*“1. Informarse adecuadamente de las condiciones del Sistema General de Pensiones, del nuevo sistema de administración de multifondos y de las diferentes modalidades de pensión.  
2. Aprovechar los mecanismos de divulgación de información y de capacitación para conocer el funcionamiento del Sistema General de Pensiones y los derechos y obligaciones que les corresponden.*

*3. Emplear la adecuada atención y cuidado al momento de tomar decisiones, como son entre otras, la afiliación, el traslado de administradora o de régimen, la selección de modalidad de pensión y de entidad aseguradora que le otorgue la renta vitalicia o la elección de tipo de fondo dentro del esquema de “Multifondos”, según sea el caso.*

*(...)*

*4. Leer y revisar los términos y condiciones de los formatos de afiliación, así como diligenciar y firmar los mismos y cualquier otro documento que se requiera dentro del Sistema General de Pensiones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 del decreto 692 de 1994 y las normas que lo modifiquen o sustituyan.*

*5. Las decisiones que se tomen dentro del Sistema General de Pensiones, manifestadas a través de documentos firmados o de otros medios idóneos autorizados para ello, implicarán la aceptación de los efectos legales, costos, restricciones y demás consecuencias derivadas de las mismas.”*

*(...)*

Teniendo en cuenta lo anterior en el caso concreto materia del litigio se encuentra que no medió por parte del accionante LUZ VASQUEZ, alguna solicitud de información que hiciera sobre su futuro pensional durante su vida laboral ya que no obra alguna dentro del acervo probatorio, sustrayéndose así de sus deberes como afiliado al sistema general de pensiones y convalidando su deseo de permanencia en el RAIS, al efectuar periódicamente las cotizaciones, sin presentar solicitud de traslado al Régimen de prima Media, en el año 1997, momento a partir del cual se encuentra válidamente en el RAIS.

Ahora bien, debe señalarse que el artículo 2º de la Ley 797 de 2003 establece la libre escogencia entre regímenes pensionales y también la posibilidad de trasladarse una vez cada cinco años contados a partir de la selección inicial, sin embargo, por razones financieras y de estabilidad en el sistema pensional, esta misma norma limitó este derecho cuando al afiliado le faltare 10 años o menos para alcanzar la edad de pensión, salvo los afiliados que tuvieran 15 años cotizados a la entrada en vigencia del Sistema general de pensiones, para quienes se conservó el derecho a regresar al Régimen de Prima Media en cualquier momento. Sobre el particular la Corte Constitucional en la Sentencia C-1024 de 2004 sostuvo lo pertinente en la sentencia C- 062 de 2010, en dichos fallos manifestó:

*“El objetivo perseguido con el señalamiento del periodo de carencia en la norma acusada consiste en evitar la descapitalización del fondo común del régimen solidario de prima media, que se produciría si se permitiera que las personas que no han contribuido al fondo común y que por lo mismo no fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para determinar las sumas que representarían en el futuro el pago de sus pensiones y su reajuste económico, pudiesen trasladarse de régimen cuando estuviesen próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a desfinanciar el sistema y por ende poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes”*

Conforme a lo anterior se encuentra que en el presente caso la parte actora se encuentra inmersa dentro de la prohibición del traslado como quiera que se encuentra a menos de 10 años del cumplimiento del requisito de edad y por lo tanto no es viable su retorno al régimen de prima media, en los términos que fue manifestado por mi defendida en las respuestas a las solicitudes presentadas.

Así mismo, el extremo demandante asegura que su afiliación al RAIS con las AFP en relación, se realizó con información errónea, por lo cual no logró tomar una decisión adecuada manifestando la falta de información, voluntad y conciencia de realizar estos actos que irradian legalidad al no demostrarse, vicios del consentimiento, dolo o error al momento de suscribirlos, y que en todo caso debe entenderse que dicha prohibición de trasladarse cuando faltaren menos de 10 años para adquirir el estatus de pensionado, solo se decretó con la expedición de la ley 797 de 2003, y la parte demandante decidió trasladarse antes de la expedición de esta Ley, y siendo una norma de alcance Nacional era su deber conocerla, por lo que no hay lugar a declarar la nulidad del traslado efectuado.

Se encuentra que el establecimiento de tal prohibición tiene como sustento la salvaguarda de los principios que regulan el sistema de seguridad social, tales como el de sostenibilidad del sistema pensional, atendiendo a que, de accederse a las pretensiones de la demanda, se estaría permitiendo el traslado de una cotizante que ya tiene la edad para adquirir el status de pensionada. Al respecto se ha pronunciado la Corte Constitucional en Sentencia C-1024/04, M.P. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL, así:

*“La medida prevista en la norma acusada, conforme a la cual el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, resulta razonable y proporcional, a partir de la existencia de un objetivo adecuado y necesario, cuya validez constitucional no admite duda alguna. En efecto, el objetivo perseguido por la disposición demandada consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, y simultáneamente, defender la equidad en el reconocimiento de las pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pues se aparta del valor material de la justicia, que personas que no han contribuido a obtener una alta rentabilidad de los fondos de pensiones, puedan resultar finalmente beneficiadas del riesgo asumido por otros. La validez de dicha herramienta legal se encuentra en la imperiosa necesidad de asegurar la cobertura en la protección de los riesgos inherentes a la seguridad social en materia pensional a todos los habitantes del territorio colombiano, en acatamiento de los principios constitucionales de universalidad y eficiencia (C.P. art. 48). Así mismo, el objetivo de la norma se adecua al logro de un fin constitucional válido, pues permite asegurar la intangibilidad de los recursos pensionales en ambos regímenes, cuando se aproxima la edad para obtener el reconocimiento del derecho irrenunciable a la pensión, en beneficio de la estabilidad y sostenibilidad del sistema pensional.”*

Por otro lado, reitero que imperioso resulta manifestar para el caso en concreto, que la honorable Corte Constitucional, mediante sentencia C-993 de 2006, al realizar un exhaustivo estudio de constitucionalidad de los artículos 1509 y ss, llegó a la siguiente conclusión:

*“En desarrollo del principio de seguridad jurídica, el ordenamiento civil colombiano adoptó el principio general del Derecho Romano según el cual la ignorancia del Derecho no sirve de excusa (iuris ignorantia non excusat), con la consecuencia de que el error de derecho perjudica (iuris error nocet). Así lo estableció en el Art. 9º del Código Civil, en virtud del cual “la ignorancia de las leyes no sirve de excusa” y en el Art. 1509 ibidem, una de las normas objeto de la demanda que se estudia, que dispone que “el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento”. Esto último significa que el error de derecho no da lugar a la declaración judicial de nulidad del negocio jurídico y que, por tanto, la parte de éste que lo cometió debe asumir todas las consecuencias de su celebración”*

En atención a lo ya expuesto, es claro que, tratándose de nulidad o ineficacia en la afiliación efectuada al RAIS, todo se traslada a lo establecido en la legislación civil en lo relacionado a la teoría del negocio jurídico, pues este trae como aspecto implícito e inherente de la acción, la voluntad de los contratantes, por lo que, atendiendo al extracto jurisprudencial en cita, se puede establecer que en el presente caso el demandante, debe asumir las cargas de la suscripción del contrato.

Adicional a lo anterior, se debe traer a colación lo manifestado en la sentencia STL – 10825 de 2017, rad. 47528, M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán, en este entendido:

*“En efecto, la tesis de que la declaración de nulidad de la afiliación por falta de cumplir con el deber de información por las AFP opera solo para las personas beneficiarias del régimen de transición pensional del artículo 36 de la ley 100 de 1993, ha sido acogida en las sentencias C-789 de 2008 y SU-130 de 2013 de la Corte Constitucional, y SL37174 de 2010 y 46380 de 2015, de esta Sala de Casación.”*

Anudado a lo anterior dicha obligación de emitir por parte de las AFPS herramientas financieras o proyecciones pensionales a los potenciales afiliados nació con el Decreto 2071 de 2015, promulgada con posterioridad al traslado del demandante.

Además, el mencionado decreto 692 de 1994 en su artículo 2.6.10.4.3. Parágrafo 2 establece:

*Parágrafo 2°. La proyección de que trata este artículo, proporcionada por la Administradora del Régimen de Ahorro individual con Solidaridad, a través de las herramientas financieras, deberá entenderse como un cálculo estimado de la eventual futura pensión. La Administradora deberá informar al afiliado que la mesada pensional resultante es una mera proyección y no un derecho consolidado, por fundamentarse en una simulación de supuestos futuros probables, pero sin certeza sobre la ocurrencia.*

Así las cosas y como quiera que el monto pensional en el RAIS también depende de variables como el rendimiento financiero de los fondos sujetos al comportamiento fluctuante de la economía, incierto resulta establecer un posible monto que le permitiera en ese momento al demandante evaluar cuál sería a futuro el régimen más favorable, en esa medida, no se puede afirmar que el silencio de las ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES, en estos aspectos constituyan falta en el deber de información.

Adicionalmente, respecto de los demás afiliados al SGP, es decir, quienes no son beneficiarios del régimen de transición, para efectos del traslado de régimen pensional, también se les aplica la regla anteriormente expuesta, contenida en el literal e) del artículo 13 de la Ley 100/93, conforme fue modificado por el artículo 2° de la Ley 797 de 2003, ambas normas interpretadas por la Corte, con efectos de cosa juzgada constitucional, en las Sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004.

Así las cosas únicamente los afiliados con quince (15) años o más de servicios cotizados a 1° de abril de 1994, fecha en la cual entró en vigencia el Sistema General de Pensiones, pueden trasladarse “en cualquier tiempo” del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, conservando los beneficios del régimen de transición» Beneficio que no ostenta la demandante en tanto a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 no contaba con 15 años de cotizaciones.

Por lo que no resulta procedente acceder a las pretensiones incoadas por LUZ VASQUEZ, al no ser legal la declaratoria de ineficacia del traslado del RPM al RAIS efectuada en el año 1997.

Finalmente debe tenerse en cuenta que en virtud del principio de la relatividad jurídica, COLPENSIONES es un tercero dentro del presente asunto y los actos jurídicos de traslado de régimen promovidos entre la AFP y la parte accionante tienen efectos inter partes, por lo tanto independientemente de la decisión adoptada por el juez de instancia, COLPENSIONES no puede ser favorecida ni perjudicada con la decisión adoptada, razón por la que resulta improcedente cualquier condena en detrimento de los intereses de mi representada.

**Con fundamentos en las anteriores declaraciones condénese.**

**Frente a las pretensiones Primera y segunda, tercera cuarta, Quinta:** Me opongo a la prosperidad de estas pretensiones toda vez que tal como se argumentó en precedencia el demandante se encuentra válidamente afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, RAIS, al firmar los formularios de afiliación con las AFP del régimen de prima media de manera libre, consciente y voluntaria.

Reiterando además que el demandante se encuentra inmerso en la prohibición dispuesta en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003 modificatoria del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y en consecuencia mi representada no puede actuar contrariando las disposiciones legales establecidas para el caso. Así mismo, el demandante no cotizó el número de semanas necesarias para exonerarse de tal disposición, por no tener cotizadas a 01 de abril de 1994 un mínimo de 15 años.

Por lo tanto, COLPENSIONES no está facultada para recibir los aportes por el efectuados al RAIS, específicamente con la AFP PORVENIR S.A, administradora a la cual se encuentra actualmente afiliado, en razón a que las cotizaciones por el realizadas al régimen administrado por la AFP tantas veces referida se realizaron de manera libre y voluntaria por su parte durante los más de 20 años por los que ha permanecido afiliado al RAIS.

Así mismo, mi representada tampoco se encuentra facultada para actualizar la historia laboral de la demandante en razón a los mismos argumentos expuestos en precedente.

Ahora bien y si en gracias de discusión se determinara que es viable el traslado de los aportes debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 100 de 1993, que establece:

**ARTÍCULO 113. TRASLADO DE RÉGIMEN.** *Cuando los afiliados al Sistema en desarrollo de la presente Ley se trasladen de un régimen a otro se aplicarán las siguientes reglas:*

*a) Si el traslado se produce del Régimen de Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad, habrá lugar al reconocimiento de bonos pensionales en los términos previstos por los artículos siguientes;*

*b) Si el traslado se produce del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prestación Definida, se transferirá a este último el saldo de la cuenta individual, incluidos los rendimientos, que se acreditará en términos de semanas cotizadas, de acuerdo con el salario base de cotización. –se subraya–*

Así las cosas, se puede determinar que en caso de condenarse a la nulidad del traslado se vulneraría el erario, en la medida en que el dinero depositado por el afiliado en la AFP, no contribuyo durante la cotización periódica del demandante al reconocimiento de las prestaciones del régimen de prima media como consecuencia de la aplicación del principio de solidaridad pensional que ostenta los afiliados al régimen de prima media, y de manera adicional, en tanto fue la AFP quien tuvo el manejo del dinero y por tanto obtuvo sus frutos por más de 10 años, y esto generaría un impacto en el PIB y en la reserva pensional.

En mérito de lo expuesto y con el fin de no vulnerar el equilibrio y sostenibilidad del sistema general de pensiones, en caso de declararse la nulidad del traslado es necesario no solo devolver las cotizaciones, con sus rendimientos, sino la totalidad de los recursos consignados y pagados por el afiliado en la AFP, como son: Los Recursos cuenta individual de ahorro, cuotas abonadas al FGPM, rendimientos, bonos pensionales, seguros Previsionales, cuotas de administración, mermas en la cuenta individual (Sentencias CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, CSJ SL 17595-2017, CSJ SL 4989-2018 y CSJ SL 1421-2019, rad. 56174), y también todos aquellos costos que debían ser sufragados al interior del RPM.

**Frente a las pretensiones sexta y séptima:** Me opongo, a la condena derivada de las facultades extra y ultra petita así como de condenas en costas en el caso bajo estudio toda vez que, no acredita las condiciones para acceder a la prestación deprecada, por lo cual esta pretensión no tiene sustento legal.

Adicionalmente mi representada no intervino en la toma de decisiones del demandante para que este realizara el traslado de régimen pensional. En este caso en particular el demandante de conformidad a lo establecido en el 13 de la ley 100 de 1993, actuó de manera libre y voluntaria al momento de decidir trasladarse del régimen de prima media con prestación definida administrado por mi representado al régimen de ahorro individual administrado por la AFP protección S.A.

Por lo anterior, manifestamos que la conducta de mi representada no está teñida de mala fe, al respecto la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

*“Como principio general del derecho, (la buena fe) ha sido reconocido por la jurisprudencia colombiana especialmente desde 1935, citándose la jurisprudencia y doctrina francesa y sobre todo el artículo 1603 del Código Civil Colombiano: “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley pertenecen a ella”. Norma que tiene su correspondencia en numerosos artículos del Código Civil y que en la década del treinta también tendrá en Colombia importante tratamiento doctrinal: “De ahí que se hable de la buena fe como de un criterio primordial en la interpretación de las convenciones, gracias al cual el juez puede sacar triunfante la equidad sobre los rigores del formalismo”.*

*“El principio de la buena fe es también principio del derecho laboral, ha sido incluido en el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 55 y aparece en la jurisprudencia laboral desde la época del Tribunal Supremo del Trabajo: “El principio de la buena fe, que no es nuevo, sino que data de las mejores tradiciones romanas, debe presidir la ejecución de los contratos, incluido el de trabajo”. Sentencia ésta proferida el 9 de febrero de 1949 y que llega hasta analizar no solo la buena fe sino la mala fe, en los siguientes términos:”*

*“La mala fe –ha dicho la Corte Suprema de Justicia- debe ser la deducción acertada hecha sobre la plena comprobación de hechos precisos de naturaleza incompatible con la bona fide, como lo sería, en tratándose de la buena fe contractual, la demostración evidente de una visible ventaja pecuniaria en una negociación celebrada con un incapaz, que mostrara un aprovechamiento inhonesto del estado de inferioridad en que ocurrió una de las partes a su celebración, es decir, la prueba de que se abusó de un estado de debilidad para obtener un indebido e injusto provecho, apreciable en el desequilibrio de los valores. Sin olvidar tampoco que la calificación de la fe jurídica, el rigor con que se exige o es exigible buena fe en los negocios de hecho, conformada probatoriamente y adoptada en las situaciones de cada caso”.*

Según lo anterior, la buena fe en la labor misional surge precisamente de la estricta aplicación de la Constitución, la Ley y el precedente jurisprudencial que permite conceder o negar prestaciones ajustadas a derecho, por lo cual, existiendo la presunción de legalidad del acto que garantiza seguridad jurídica en la decisión prestacional, tal circunstancia permite revestir además bajo la égida de la buena fe el reconocimiento o negación pensional por lo que es de carga exclusiva del demandante controvertir tanto la presunción legal del acto como la buena fe en la decisión.

## **RAZONES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO**

### **Normativos:**

#### **1. Ley 100 de 1993**

##### **ARTÍCULO 12. REGÍMENES DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES.**

El Sistema General de Pensiones está compuesto por dos regímenes solidarios excluyentes pero que coexisten, a saber:

- a. Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida.
- b. Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

##### **ARTÍCULO 13. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES.** El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características:

(...) b. La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al

momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley. (...)

e. Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez;”

**ARTÍCULO 16. INCOMPATIBILIDAD DE RÉGIMENES.** Ninguna persona podrá distribuir las cotizaciones obligatorias entre los dos Regímenes del Sistema General de Pensiones. Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de la facultad de los afiliados para contratar o ser partícipes en planes de pensiones complementarios dentro o fuera del Sistema General de Pensiones

## **2. Decreto 692 de 1994**

**ARTÍCULO 3o. SELECCIÓN DE RÉGIMEN PENSIONAL.** A partir del 1o. de abril de 1994, los afiliados al Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, podrán seleccionar cualquiera de los dos regímenes que lo componen. En consecuencia, deberán seleccionar uno de los siguientes regímenes:

- a) Régimen solidario de prima media con prestación definida;
- b) Régimen de ahorro individual con solidaridad. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 100 de 1993, ninguna persona podrá estar simultáneamente afiliada a los dos regímenes del Sistema.

**ARTÍCULO 11. DILIGENCIAMIENTO DE LA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN.** La selección del régimen implica la aceptación de las condiciones propias de éste, para acceder a las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y demás prestaciones económicas a que haya lugar.

La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos en los artículos anteriores es libre y voluntaria por parte del afiliado. Tratándose de trabajadores con vinculación contractual, legal o reglamentaria, la selección efectuada deberá ser informada por escrito al empleador al momento de la vinculación o cuando se traslade de régimen o de administradora, con el objeto de que éste efectúe las cotizaciones a que haya lugar.

Quienes decidan afiliarse voluntariamente al sistema, manifestarán su decisión al momento de vincularse a una determinada administradora.

Efectuada la selección el empleador deberá adelantar el proceso de vinculación con la respectiva administradora, mediante el diligenciamiento de un formulario previsto para el efecto por la Superintendencia Bancaria, que deberá contener por lo menos los siguientes datos:

- a) Lugar y fecha;
- b) Nombre o razón social y NIT del empleador;
- c) Nombre y apellidos del afiliado;
- d) Número de cédula o NIT del afiliado;
- e) Entidad administradora del régimen de pensiones a la cual desea afiliarse, la cual podrá estar preimpresa;
- f) Datos del cónyuge, compañero o compañera permanente, hijos o beneficiarios del afiliado.

El formulario deberá diligenciarse en original y dos copias, cuya distribución será la siguiente: el original para la administradora, una copia para el empleador y otra para el afiliado.

No se considerará válida la vinculación a la administradora cuando el formulario respectivo no contenga los anteriores datos, en cuyo caso la administradora deberá notificar al afiliado y a su respectivo empleador la información que deba subsanarse.

(...)

**ARTÍCULO 14. EFECTOS DE LA AFILIACIÓN.** La afiliación surtirá efectos a partir del primer día del mes siguiente a aquel en el cual se efectuó el diligenciamiento del respectivo formulario.

Será responsable del pago de las pensiones o prestaciones económicas a que haya lugar, la administradora que haya recibido o le corresponda recibir el monto de las cotizaciones del período en el cual ocurre el siniestro o hecho que da lugar al pago de la pensión o prestación correspondiente

**ARTÍCULO 15. TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL.** Una vez efectuada la selección de uno de cualquiera de los regímenes pensionales, mediante el diligenciamiento del formulario, los afiliados no podrán trasladarse de régimen, antes de que hayan transcurrido tres años contados desde la fecha de la selección anterior. Para el traslado del régimen solidario de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad y de éste al de prima media, se aplicará lo siguiente:

a) Si el traslado se produce del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, habrá lugar al reconocimiento de bonos pensionales. La expedición de los bonos se regirá por lo dispuesto en el artículo 18 del presente Decreto y la reglamentación que al efecto se expida en uso de las facultades extraordinarias de que trata el numeral 5 del artículo 139 de la Ley 100 de 1993.

b) Si el traslado se produce del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, se le acreditarán en este último el número de semanas cotizadas en el primero y se transferirá el saldo de la cuenta individual, incluidos los rendimientos y el bono pensional cuando sea del caso. Las cotizaciones voluntarias cuyo retiro no se le haya efectuado al momento del traslado, se devolverán al afiliado, previa solicitud efectuada seis (6) meses antes del traslado

### **3. Decreto 663 de 1993.**

Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicios claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado.

### **4. Ley 795 de 2003**

Información a los usuarios. Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado y poder tomar decisiones informadas

### **5. Ley 1328 de 2009**

**ARTÍCULO 9. CONTENIDO MÍNIMO DE LA INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO.** En desarrollo del principio de transparencia e información cierta, suficiente y oportuna, las entidades vigiladas deben informar a los consumidores financieros, como mínimo, las características de los productos o servicios, los derechos y obligaciones, las condiciones, las tarifas o precios y la forma para determinarlos, las medidas para el manejo seguro del producto o servicio, las consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato, y la demás información que la entidad vigilada estime conveniente para que el consumidor comprenda el contenido y funcionamiento de la relación establecida para suministrar un producto o servicio. En particular, la información que se suministre previamente a la celebración del contrato, deberá permitir y facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado.

## **6. Decreto 2555 de 2010**

ARTÍCULO 2.6.10.2.3. Las administradoras tienen el deber del buen consejo, por lo que se encuentran obligadas a proporcionar a los consumidores financieros información completa sobre las alternativas de su afiliación al esquema de Multifondos, así como los beneficios, inconvenientes y efectos de la toma de decisiones en relación con su participación en cualquiera de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones.

En consecuencia, las administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad deberán suministrar una información clara, cierta, comprensible y oportuna respecto de las condiciones de su afiliación, de manera tal que el consumidor financiero pueda tomar la decisión informada de vincularse a dicho régimen o de trasladarse entre administradoras del mismo o de elegir el tipo de fondo dentro del esquema de “Multifondos” o de seleccionar la modalidad de pensión o de escoger la aseguradora previsional en el caso de seleccionar una renta vitalicia.

Lo anterior, sin perjuicio de la información que deberá ser remitida a los consumidores financieros en los extractos de conformidad con las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia para el efecto.

En todo caso, el consumidor financiero podrá solicitar en cualquier momento durante la vigencia de su relación con la administradora toda aquella información que razonablemente requiera para tomar decisiones informadas en relación con su participación en cualquiera de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones.

PARÁGRAFO 1. La asesoría a que se refiere el presente decreto tendrá el alcance previsto en este artículo y en ningún caso será interpretada conforme a las normas relativas al deber de asesoría o a la actividad de asesoría dispuestas en este decreto, o las normas que en adelante la modifiquen o sustituyan.

PARÁGRAFO 2. Los consumidores financieros deberán manifestar de forma libre y expresa a la administradora su decisión de vincularse al régimen de Ahorro Individual con Solidaridad o de trasladarse entre administradoras del mismo o de elegir el tipo de fondo dentro del esquema de “Multifondos” o de seleccionar la modalidad de pensión o de escoger la aseguradora previsional en el caso de seleccionar una renta vitalicia, a través de medios verificables de conformidad con las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia.

En dicho medio deberá constar que el consumidor financiero recibió la información suficiente y la asesoría requerida y que, en consecuencia, entiende y acepta los efectos legales, así como los potenciales riesgos y beneficios de su decisión.

PARÁGRAFO 3. Las administradoras de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones responderán por la actuación de los promotores de conformidad con lo previsto en el artículo 10 del Decreto 720 de 1994

## **7. Ley 1748 de 2014**

“PARÁGRAFO 1o. Adicionar un inciso 2o al artículo 9o de la Ley 1328 de 2009, que regula el contenido mínimo de la información al consumidor financiero, cuyo texto es el siguiente: En desarrollo de lo anterior, las Administradoras del Sistema General de Pensiones deberán garantizar que los clientes que quieran trasladarse entre regímenes pensionales, reciban asesoría de representantes de ambos regímenes, como condición previa para que proceda el traslado entre regímenes. Lo anterior de conformidad con las instrucciones que para el efecto imparta la Superintendencia Financiera de Colombia

## **8. Decreto 2071 de 2015**

Las administradoras del Sistema General de Pensiones tienen el deber del buen consejo, por lo que se encuentran obligadas a proporcionar a los consumidores financieros información completa respecto a los beneficios, inconvenientes y efectos de la toma de decisiones en relación con su participación en cualquiera de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones Las



administradoras de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones, deberán garantizar que los afiliados que quieran trasladarse entre regímenes pensionales, esto es del Régimen de Ahorro Individual al Régimen de Prima Media y viceversa, reciban asesoría de representantes de ambos regímenes, como condición previa para que proceda el traslado.

Lo anterior de conformidad con las instrucciones que para el efecto imparta la Superintendencia Financiera de Colombia. La asesoría de que trata el inciso anterior deberá contemplar como mínimo la siguiente información conforme a la competencia de cada administradora del Sistema General de Pensiones:

1. Probabilidad de pensionarse en cada régimen.
2. Proyección del valor de la indemnización sustitutiva o devolución de saldos, lo anterior frente a la posibilidad de no cumplir los requisitos de ley para acceder a la pensión de vejez a la edad prevista en la normatividad vigente.
3. Proyección del valor de la pensión en cada régimen.
4. Requisitos para acceder a la garantía de pensión mínima en cada régimen.
5. Información sobre otros mecanismos de protección a la vejez vigentes dentro de la legislación.
6. Las demás que la Superintendencia Financiera de Colombia establezca.

En todo caso, el consumidor financiero podrá solicitar en cualquier momento durante la vigencia de su relación con la administradora toda aquella información que requiera para tomar decisiones informadas en relación con su participación en cualquiera de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones. En particular, las administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad deberán poner a disposición de sus afiliados herramientas financieras que les permitan conocer las consecuencias de su traslado al Régimen de Prima Media, así mismo deben suministrar una información clara, cierta, comprensible y oportuna respecto de: las condiciones de su afiliación al régimen, de manera tal que el consumidor financiero pueda tomar la decisión informada de vincularse a dicho régimen o de trasladarse entre administradoras del mismo o de elegir el tipo de fondo dentro del esquema de “Multifondos” o de seleccionar la modalidad de pensión o de escoger la aseguradora previsional en el caso de seleccionar una renta vitalicia. Lo anterior, sin perjuicio de la información que deberá ser remitida a los consumidores financieros en los extractos de conformidad con la reglamentación existente sobre el particular y las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia para el efecto. Para el caso de la proyección del beneficio pensional en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, la Administradora deberá realizar una asesoría en los términos descritos en el artículo 2.6.10.4.3 del presente decreto.

PARÁGRAFO 1o. La asesoría a que se refiere el presente artículo tendrá el alcance previsto en estas disposiciones y en ningún caso será interpretada conforme a las normas relativas al deber de asesoría contenidas en el artículo 7.3.1.1.3, o las normas que la modifiquen o sustituyan. La asesoría de que trata el inciso 2o del presente artículo, así como la información que arroje la herramienta financiera deberán entenderse como un cálculo estimado de la futura pensión, de la devolución de saldos y de la indemnización sustitutiva. Dichas proyecciones no corresponden a un derecho consolidado, por fundamentarse en una simulación de supuestos futuros probables, pero sin certeza sobre la ocurrencia.

PARÁGRAFO 2o. Los consumidores financieros deberán manifestar de forma libre y expresa a la administradora su decisión de vincularse al régimen de Ahorro Individual con Solidaridad o al régimen de Prima Media con Prestación Definida o de trasladarse de régimen o de trasladarse entre administradoras del mismo régimen o de elegir el tipo de fondo dentro del esquema de “Multifondos” o de seleccionar la modalidad de pensión o de escoger la aseguradora previsional en el caso de seleccionar una renta vitalicia, a través de medios verificables de conformidad con las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia. En dicho medio deberá constar que el consumidor financiero recibió la información suficiente y la asesoría requerida y que, en consecuencia, entiende y acepta los efectos legales, así como los potenciales riesgos y beneficios de su decisión. Concordancias.

PARÁGRAFO 3º. Las administradoras de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones responderán por la actuación de los promotores de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.7.4.1. del Decreto 1833 de 2016.

## Referencias jurisprudenciales:

La sentencia SL 1452-2019, Rad 68852, de la M.P., Clara Cecilia Dueñas Quevedo sentó las primeras reglas de aplicación de la nulidad de traslado por indebida asesoría. En resumen, en esta sentencia se establecieron las siguientes reglas:

- a) Se aclaró el alcance de la obligación relativa al deber de información de las administradoras de fondos de pensiones, de forma que el mismo ha existido desde la expedición de la L. 100/1993, no obstante, debe medirse según su avance en el tiempo:

*“Según se pudo advertir del anterior recuento, las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. Desde luego que con el transcurrir del tiempo, el grado de intensidad de esta exigencia cambió para acumular más obligaciones, pasando de un deber de información necesaria al de asesoría y buen consejo, y finalmente al de doble asesoría. Lo anterior es relevante, pues implica la necesidad, por parte de los jueces, de evaluar el cumplimiento del deber de información de acuerdo con el momento histórico en que debía cumplirse, pero sin perder de vista que este desde un inicio ha existido”.*

- b) Se determinó si es suficiente el diligenciamiento del formulario de afiliación para satisfacer esta obligación, respecto a lo cual concluyó que no es suficiente para satisfacer el deber de información:

*“La Sala considera desacertada esta tesis, en la medida que la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpreso de los fondos de pensiones, tales como “la afiliación se hace libre y voluntaria”, “se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones” u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acreditan un consentimiento, pero no informado”.*

- c) Se determinó quien tiene la carga de la prueba frente al cumplimiento del deber de asesoría es la administradora de fondos de pensiones:

*“En consecuencia, si se arguye que a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y suficiente, pese a que debía hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumplió voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento. En ese sentido, tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministró la asesoría en forma correcta. Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó, dado que es quien está en posición de hacerlo”.*

- d) Se esclareció si la ineficacia de la afiliación y nulidad de traslado solo tiene cabida en casos de expectativas de pensión o derechos causados, respecto a lo cual concluyó que tiene cabida en cualquier escenario:

*“Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo. Esto, desde luego, teniendo en cuenta las particularidades de cada asunto”.*

Así las cosas, el deber de información ha tenido una evolución en el tiempo y la exigencia a las administradoras de fondos de pensión debe tener en cuenta la vigencia de la normatividad expedida.

En la sentencia citada (Sent. SL 1452-2019) se estableció las reglas actuales en materia de ineficacia del traslado, el grado de intensidad del deber de asesoría ha cambiado con lo cual, los jueces deben evaluar el cumplimiento de este deber con base la vigencia de las normas.

Exigir una carga en el deber de asesoría desproporcionada a la administradora de fondos de pensiones implica desconocer lo señalado por la jurisprudencia de la Sala Laboral de la C.S.J., y una vulneración al principio de confianza legítima, debido proceso y seguridad jurídica.

Cabe resaltar el uso del formato de reasesoría por parte de las administradoras, permite confirmar que el afiliado conoce las condiciones del régimen pensional en que se encuentra así como su situación y expectativa pensional, lo cual se ajusta al deber de información que existía antes de la Ley 1748 de 2014 que creó el deber de doble asesoría solo hasta la vigencia de esta norma.

También juega un papel relevante el nivel educativo del afiliado, así lo ha señalado la Corte Constitucional en sentencia T-422/2011 donde para determinar la validez de un traslado tuvo en cuenta el nivel educativo del afiliado:

*“Con base en lo anterior la Sala deduce que el actor nunca fue desafiliado materialmente del régimen de prima media administrado por el Instituto de Seguros Sociales y por ello acogerá la pretensión del actor, pero no en el sentido de declarar la nulidad de la afiliación porque ésta nunca existió, sino declarando que la única afiliación válida al régimen de pensiones ha sido la efectuada al régimen de prima media con prestación definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales. Por considerar suficiente la razón anterior, la Sala no encuentra necesario dilucidar si al momento de firmar el formulario de afiliación con la AFP COLFONDOS al régimen de ahorro individual con solidaridad, se presentó algún vicio del consentimiento o al menos fuerza moral que haya podido viciarlo; lo anterior se afirma por la sensación que puede tener un campesino sin mayor preparación académica, al momento de celebrar un contrato de trabajo, de lo que podría ocurrir si no llegara a firmar la documentación que le presentan y por la ausencia de espontaneidad en la suscripción del formulario. Seguridad Social del accionante”*

Recientemente la Sala Laboral de la C.S.J., puso de presente la aplicación de la afiliación tácita de la siguiente manera en la Sentencia SL 757 de 2021:

*“Así, ha dicho que la afiliación tácita opera cuando hay silencio de la administradora con relación a las posibles deficiencias o a la falta de la afiliación, pero se recibe el pago de aportes por un período significativo. En la sentencia CSJ SL 2810-2019, menciona otras anteriores y expresa: Para dar solución a este aspecto, resulta suficiente mencionar que cuando la entidad de pensiones guarda silencio frente a deficiencias en la afiliación del trabajador y recibe aportes sin cuestionamiento alguno, tal como ocurrió en el sub lite, se configura una “aceptación tácita de la afiliación”, tal como lo sostuvo la Corte en la sentencia de radicación nº. 46106 del 04 de julio de 2012, en la que reiteró lo adoctrinado en la nº. 40531 del 19 de julio de 2011, en la siguiente forma: Adicionalmente, es de resaltar que la solución dada por el ad quem al caso particular del sub lite, justamente, responde al mandato constitucional contenido en el artículo 48 que garantiza el derecho irrenunciable a la seguridad social y la reconoce como un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Es evidente que sería letra muerta el principio de eficiencia si se permitiera que el fondo se exonerara del reconocimiento de la pensión de invalidez pese a que el beneficiario ha cotizado el tiempo requerido para tener el derecho y reúna los demás requisitos (como en el sub lite) solo porque faltó el diligenciamiento del formulario, y el fondo solo se lo vino a decir justo cuando reclama la prestación a que tiene derecho. Tampoco, se le estaría garantizando el derecho constitucional a la seguridad social.*

*No sobra precisar que, conforme al artículo 333 superior, las empresas tienen una función social, función que debe ser más exigente cuando se trata de personas jurídicas encargadas de administrar el sistema de seguridad social en pensiones como ocurre con la recurrente; importa también señalar que el inciso 5º del artículo 48 de la Carta Política señala que “no se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella”; lo anterior impone interpretar que sería contraria a los principios que informan a la seguridad social que cotizaciones realizadas por el trabajador y por el empleador destinadas a financiar los riesgos de la seguridad social, fueran desviadas a*

*cuentas neutras y amorfas, y no a realizar los fines superiores perseguidos por la seguridad social que por esencia les corresponde. En el presente caso, se reitera, el fondo omitió dar información al trabajador y al empleador, oportunamente, sobre la falta de afiliación, y no es para nada razonable que resulte favorecida de su propia omisión, máxime que el trabajador efectivamente realizó los aportes al sistema contribuyendo así a la sostenibilidad financiera del sistema. Por último, la Sala advierte que, en el caso del sub lite, el ex empleador acudió al fondo de pensiones y consignó los aportes a nombre del causante, los cuales fueron recibidos por este sin que diera a conocer reparo alguno; por lo que no es el típico caso de incumplimiento de la obligación de afiliación al sistema de pensiones por parte del empleador, como lo pretende hacer ver el fondo demandado, para trasladarle, sin razón, toda la responsabilidad al empleador.”*

Por otro lado, respecto de la carga de la prueba, la Corte Constitucional en la Sentencia C-086 de 2016 señaló:

*“Con esa orientación general, de manera expresa se propuso acoger la teoría de la “carga dinámica de la prueba”, catalogada con acierto como institución “novedosa” en la legislación colombiana.*

*En la exposición de motivos se afirmó que el derecho fundamental a la prueba implicaba acceder a ella “sin obligar al necesitado a realizar actos de proeza” que en la práctica hicieran nugatorio ese derecho. Fue así como se señaló que, al amparo del principio de solidaridad, en algunos casos podría haber un desplazamiento de dicha carga según las particularidades de cada caso y las reglas de la experiencia, pero con la clara y expresa advertencia que la carga de la prueba mantendría su concepción clásica (onus probandi): “Nuestra Constitución consagra en el artículo 29 Superior, el derecho a presentar pruebas y a controvertirlas. El derecho fundamental a la prueba implica que a ella se debe acceder sin obligar al necesitado a realizar actos de proeza o que sencillamente a pesar de tener ese derecho, le resulte imposible conseguirla, porque quien la puede desahogar es su contraparte y esta no tiene interés en hacerlo. Frente a esta realidad y con sustento en el artículo 1º de la Constitución Política que se refiere a la solidaridad de las personas, se consagra que cuando a una de las partes le resulte más fácil probar determinados hechos, corresponde a ella demostrarlos. La carga de la prueba mantiene su concepción clásica, pero en determinados casos hay un desplazamiento a una especie de solidaridad dentro de la concepción liberal para que el otro que tiene la facilidad por motivos que no es necesario ni siquiera enunciar, ya que en cada caso y de conformidad con las reglas de la experiencia se llegará a la conclusión, a quién le quedaba más fácil probar un determinado hecho”.*

De esta forma, la Sala Laboral de la C.S.J., se ha opuesto a la noción clásica de carga de la prueba que corresponde al demandante y ha convertido en regla general la carga dinámica de la prueba lo cual vulnera el derecho al debido proceso del fondo de pensiones que es demandando, quien particularmente solo cuenta con el formulario de afiliación como prueba, en la mayoría de los escenarios, el cual no tiene validez alguna para demostrar la debida asesoría según la jurisprudencia. En línea con lo anterior, existe una indebida aplicación del artículo 1601 del Código Civil en la medida que, se aduce por la jurisprudencia que la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo, con lo cual se realiza un traslado de la carga de la prueba a la administradora, pero se olvida que en los términos del Decreto 2241 de 2010 el afiliado también tiene la obligación de asesorarse con lo cual, también le es aplicable el artículo 1601 del Código Civil.

#### **Conclusión para el caso concreto:**

No se pueden conciliar las pretensiones pues debemos tener en cuenta que no es procedente declarar la nulidad de la afiliación realizada por la accionante del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y condenar a mi Representada a recibir los aportes y activar la afiliación del mismo en el Régimen de Prima media, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Lo primero que debe indicarse es que un trabajador en virtud al derecho a la libre escogencia de régimen pensional contemplado en la ley 100 de 1993, puede optar por el

RPM o el RAIS, de conformidad con las normas vigentes para el efecto y de acuerdo con sus condiciones laborales, familiares y económicas. Sin embargo, si el afiliado encuentra que el régimen al que se encuentra afiliado no es el que le conviene, la misma normatividad estableció la posibilidad de trasladarse entre regímenes 1 vez cada 5 años contados a partir de la afiliación inicial y hasta cuando le faltare 10 años o menos para adquirir su derecho pensional (artículo 13 de la Ley 100 de 1993).

Por lo tanto se tiene que la solicitud de traslado al RPM se presentó ante COLPENSIONES **el 24 de mayo de 2023**, y al verificar su cédula de ciudadanía se constata como fecha de nacimiento de **05 de octubre de 1968**, se obtiene que para aquella data **contaba con 54 años de edad**, concluyéndose así que la demandante ya se encontraba inmersa dentro de la prohibición consagrada en el artículo 13 de la ley 100 de 1993, literal e, y dado que no cuenta con 15 años de cotizaciones para el 1° de abril de 1994; en virtud de lo establecido en la sentencia SU 062 de 2010; tal como se puede evidenciar de su Historia Laboral, resultaría a todas luces improcedente su traslado.

Pese a lo anterior y una vez analizado el soporte probatorio obrante en el expediente, se establece que no es procedente declarar la ineficacia del traslado del régimen de prima media con prestación definida al Régimen de Ahorro individual con solidaridad, por cuanto la demandante se encuentra válidamente afiliada al RAIS al suscribir de manera voluntaria, consciente y sin presiones el formulario de afiliación a la AFP Colfondos desde 9 abril de 1997.

Posteriormente la demandante suscribió formulario de solicitud de vinculación con el Fondo de Pensiones Obligatorios administrado por PROTECCION S.A, el día 1 de abril de 2004.

Lo anterior encuentra sustento en que el Decreto 692 de 1994 en su artículo 11, el cual reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993 y establece que la selección del régimen pensional implica la aceptación de las condiciones propias de este para acceder a las prestaciones de invalidez, vejez o muerte. (El subrayado fuera del texto original).

Señala la norma anterior, los requisitos de forma que debe contener el formulario que se debe diligenciar para adelantar el proceso de vinculación con la respectiva administradora. Y finalmente, establece que cuando el afiliado que se traslade por vez primera del RPM al RAIS, en el formulario deberá consignarse que la decisión de trasladarse al régimen seleccionado se ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones y además autoriza la norma a que el formulario contenga leyenda impresa en este sentido, de lo que se puede inferir que la demandante eligió como su administradora para los regímenes de invalidez, vejez y muerte a la AFP referida.

Adicional a lo anterior, debe tenerse en cuenta que, para la fecha del traslado de la demandante, la entonces Superintendencia Bancaria hoy Financiera, estableció en la Circular Externa No. 019 de 1998 que, en virtud del Decreto anteriormente aludido, el diligenciamiento del formulario debe realizarse para hacer efectivo el traslado entre regímenes pensionales, y era el único requisito sustancial que exigía la ley para la época del traslado del demandante, pues en él se consignaba la voluntad de afiliación de quien lo suscribía.

Por otro lado, se debe traer a colación lo manifestado en la sentencia STL – 10825 de 2017, rad. 47528, M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán, en este entendido:

*“En efecto, la tesis de que la declaración de nulidad de la afiliación por falta de cumplir con el deber de información por las AFP opera solo para las personas beneficiarias del régimen de transición pensional del artículo 36 de la ley 100 de 1993, ha sido acogida en las sentencias C-789 de 2008 y SU-130 de 2013 de la Corte Constitucional, y SL37174 de 2010 y 46380 de 2015, de esta Sala de Casación.”* (Subrayado fuera de texto)

Debe indicarse además que, mediante el derecho a la libre escogencia de régimen en materia pensional el afiliado está aceptando directamente todas las condiciones que se encuentran inmersas en él y el desconocimiento de cualquier disposición frente a este no es argumento suficiente para alegar la nulidad del traslado entre regímenes. Además, la normatividad que regula el RAIS se encuentra establecida en el Título III de la Ley 100 de 1993 estando esta información a disposición

de todos, en especial de los afiliados, y puede verificarse en cualquier momento, pues cabe recordar y resaltar que según el artículo 9 del Código Civil “la ignorancia de la ley no sirve de excusa”.

Argumento que se encuentra en consonancia con lo manifestado por la Corte Constitucional en Sentencia C-993 de 2006:

*“(…) en desarrollo del principio de seguridad jurídica, el ordenamiento civil colombiano adoptó el principio general del Derecho Romano según el cual la ignorancia del Derecho no sirve de excusa (iuris ignorantiam non excusa), con la consecuencia de que el error de derecho perjudica (iuris error noche). Así lo estableció en el Art. 9º del Código Civil, en virtud del cual “la ignorancia de las leyes no sirve de excusa” y en el Art. 1509 ibidem, una de las normas objeto de la demanda que se estudia, que dispone que “el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento”. Esto último significa que el error de derecho no da lugar a la declaración judicial de nulidad del negocio jurídico y que, por tanto, la parte de éste que lo cometió debe asumir todas las consecuencias de su celebración” (Subrayas y negrita fuera del texto original)*

Por otro lado, y como argumento de la demandante, quien cuestiona la falta de información por parte de la AFP COLFONDOS y PROTECCION al momento de realizar todo el trámite de traslado entre regímenes. Frente a este argumento, se trae a colación lo dispuesto en la Ley 1748 de 2014 (a través de la cual se reguló la obligación de brindar información transparente a los consumidores de los servicios financieros, dentro de los cuales se encuentran los servicios en materia de pensiones), que en su parágrafo 1º del artículo 2º, referente a la obligación de los fondos de pensiones de poner a disposición de sus afiliados la información referente a su situación ante el sistema pensional, establece que:

(…)

*PARÁGRAFO 1o. Adicionar un inciso 2o al artículo 9o de la Ley 1328 de 2009, que regula el contenido mínimo de la información al consumidor financiero, cuyo texto es el siguiente: En desarrollo de lo anterior, las Administradoras del Sistema General de Pensiones deberán garantizar que los clientes que quieran trasladarse entre regímenes pensionales, reciban asesoría de representantes de ambos regímenes, como condición previa para que proceda el traslado entre regímenes. Lo anterior de conformidad con las instrucciones que para el efecto imparta la Superintendencia Financiera de Colombia.”*

Tal como se menciona en el parágrafo del artículo en cita, su disposición se debe adicionar, mediante la figura del inciso, al artículo 9 de la Ley 1328 de 2009 el cual hace referencia al contenido mínimo de la información al consumidor financiero y por lo tanto solo hasta el año 2014 se fijó como condición previa para que proceda el traslado entre regímenes brindar asesoría para los afiliados.

De acuerdo a lo anterior, **el traslado del demandante se realizó en el año 1997**, época en la cual la condición previa de brindar asesoría no estaba establecida dentro del ordenamiento jurídico vigente y por lo tanto procedería únicamente para aquellos traslados entre regímenes que se efectuaran a partir del año 2014. Argumento que desvirtuaría las pretensiones de la demanda en razón a que estas se fundamentan en la falta de información por parte de los representantes de las AFP PROTECCIÓN S.A mencionadas obligación que solo se instauró en el ordenamiento jurídico hasta el año 2014.

Resulta necesario, además, manifestar que no se puede tener como cierto que la falta de información se basó en que la AFP demandada no realizó una proyección pensional al demandante al momento de su traslado, por lo que no pueden tenerse en cuenta las proyecciones pensionales, pues estas no son pruebas útiles para demostrar una eventual información distorsionada o incompleta al momento en que **decidió su traslado**, dentro de las opciones que la ley le daba. Sumado a ello, dicha obligación de emitir por parte de las AFP herramientas financieras o proyecciones pensionales a los potenciales afiliados nació con el Decreto 2071 de 2015, es decir, con posterioridad al traslado del demandante.

Además, el mencionado decreto en su artículo 2.6.10.4.3. Parágrafo 2 establece:

*“Parágrafo 2°. (...) La Administradora deberá informar al afiliado que la mesada pensional resultante es una mera proyección y no un derecho consolidado, por fundamentarse en una simulación de supuestos futuros probables, pero sin certeza sobre la ocurrencia.” (...) (Negritas y Subrayas fuera del texto original)*

En concordancia con lo expuesto se evidencia además que la demandante tenía deberes como consumidor financiero del Sistema General de Pensiones, al respecto señala el Artículo 2.6.10.1.4 del Decreto 2550 de 2010 (Artículo 4 del Decreto 2241 de 2010). Respecto de los deberes los siguientes:

*“1. Informarse adecuadamente de las condiciones del Sistema General de Pensiones, del nuevo sistema de administración de multípagos y de las diferentes modalidades de pensión.*

*2. Aprovechar los mecanismos de divulgación de información y de capacitación para conocer el funcionamiento del Sistema General de Pensiones y los derechos y obligaciones que les corresponden.*

*3. Emplear la adecuada atención y cuidado al momento de tomar decisiones, como son entre otras, la afiliación, el traslado de administradora o de régimen, la selección de modalidad de pensión y de entidad aseguradora que le otorgue la renta vitalicia o la elección de tipo de fondo dentro del esquema de “Multípagos”, según sea el caso.*

*(...)*

*4. Leer y revisar los términos y condiciones de los formatos de afiliación, así como diligenciar y firmar los mismos y cualquier otro documento que se requiera dentro del Sistema General de Pensiones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 del decreto 692 de 1994 y las normas que lo modifiquen o sustituyan.*

*5. Las decisiones que se tomen dentro del Sistema General de Pensiones, manifestadas a través de documentos firmados o de otros medios idóneos autorizados para ello, implicarán la aceptación de los efectos legales, costos, restricciones y demás consecuencias derivadas de las mismas.”*

*(...).*

Por tanto, debe señalarse que la afiliación fue totalmente válida, puesto que no se configuraron vicios de consentimiento en la suscripción de la afiliación, vicios que se estipulan en el artículo 1109 del código civil, los cuales son: error, dolo, violencia, lesión o incapacidad al momento de suscribir formularios de traslado a las AFP PROTECCION S.A, COLFONDOS S.A, PROTECCIÓN S.A, resaltando que no existió la nulidad que se pretende hacer valer.

Así mismo existe una vinculación de fecha 1 de abril de 2004 al Fondo de pensiones Obligatorio de PROTECCION , donde la afiliado afirma que recibió información pertinente y conoce las implicaciones del traslado al régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, así como el término que tenía para retracto. Así mismo con dicha firma está aceptando que recibió y conoce el reglamento de Fondo de Pensiones y el plan que selecciono a los cuales se adhirió.

Por lo que se observa que la elección se hizo de manera libre y voluntaria por parte del afiliado.

Adicionalmente se tiene que la parte demandante no solicitó información sobre su futuro pensional como se evidencia con lo aportado con la demanda, puesto que no obra prueba alguna dentro del acervo probatorio de que se hubiera requerido información a las AFP, por lo que se confirma su deseo de permanencia en el RAIS, al decidir continuar afiliada al mismo por más de **26 años**, acatando y sometándose a las consecuencias o manejo de sus aportes al arbitrio del Régimen de Ahorro Individual, regulación que se encuentra plasmada en la ley de la Seguridad Social a partir del artículo 59, lo que debe conocer toda persona del territorio nacional, misma que no debe de ser desconocida por cuanto el desconocimiento de la norma no exime de responsabilidad alguna, como se consagra en el artículo 1159 del Código Civil, puesto que no se configuraría un error de derecho, pues la norma es expresa al prescribir los lineamientos y funcionamientos tanto del RAIS, como del RPM.

Finalmente debe manifestarse que es contrario a las leyes de la lógica y la sana crítica, que se declare la omisión de aplicación de normas y circulares emitidas con posterioridad a la fecha de traslado de régimen de la demandante.

Reiterando además que la demandante se encuentra inmerso en la prohibición dispuesta en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003 modificatoria del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 pues a la **fecha cuenta con 54 años de edad** y en consecuencia mi representada no puede actuar contrariando las disposiciones legales establecidas para el caso. Así mismo, la demandante no cotizó el número de semanas necesarias para exonerarse del mismo, por no tener cotizadas a 01 de abril de 1994 un mínimo de 750 semanas.

Por lo tanto, COLPENSIONES no está facultada para recibir los aportes por el efectuados al RAIS, específicamente a la AFP PROTECCIÓN S.A, siendo esta última la administradora a la cual se encuentra actualmente afiliada, en razón a que las cotizaciones por ella realizadas al régimen administrado por la AFP tantas veces referida se realizaron de manera libre y voluntaria por su parte durante **los más de 26 años** por los que permaneció afiliada al RAIS, sin existir afiliación alguna al RPM por parte de la actora.

Así mismo, mi representada tampoco se encuentra facultada para actualizar la historia laboral de la demandante en razón a los mismos argumentos expuestos en precedente.

Esto se ratifica en la Sentencia 2019 – 0034-01 proferida por el juzgado tercero de la ciudad de Tunja confirmada por el Tribunal Superior de Tunja Sala Laboral mediante radicado 2020-1012 Magistrado Ponente Fanny Elizabeth Robles Martínez y la Sentencia de segunda instancia con radicado 2020-1253 proferida por el Tribunal Superior De Tunja Sala Laboral Magistrado Ponente Julio Enrique Mogollón González, en donde se recalca la imposibilidad que tiene mi representada al momento de recibir a la afiliada en razón a que la misma nunca estuvo afiliada a Colpensiones y mucho menos aporte a la entidad, razón por la cual no es viable el traslado de los afiliados que no tuvieron por lo menos alguna cotización a Colpensiones.

*(...) “Ante tal escenario, no puede predicarse la ineficacia del traslado, por cuanto la actora no demostró su afiliación al régimen de prima media con prestación definida, antes de su afiliación al RAIS. Tampoco pasa inadvertido que el formulario de solicitud de afiliación al ISS, obrando a folio 12 es del 2008: ni que el reporte de semanas cotizadas en pensiones a Colpensiones obrante a folio 107, no registra afiliación ni registro histórico alguno.” (...)*

Ahora bien y si en gracia de discusión se determinara que es viable el traslado de los aportes debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 100 de 1993, que establece:

ARTÍCULO 113. TRASLADO DE RÉGIMEN. Cuando los afiliados al Sistema en desarrollo de la presente Ley se trasladen de un régimen a otro se aplicarán las siguientes reglas:

- a) Si el traslado se produce del Régimen de Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad, habrá lugar al reconocimiento de bonos pensionales en los términos previstos por los artículos siguientes;
- b) Si el traslado se produce del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prestación Definida, se transferirá a este último el saldo de la cuenta individual, incluidos los rendimientos, que se acreditará en términos de semanas cotizadas, de acuerdo con el salario base de cotización.

Así las cosas, se puede determinar que en caso de condenarse a la nulidad del traslado se vulneraría el erario, en la medida en que el dinero depositado por el afiliado en la AFP, no contribuyó durante la cotización periódica de la demandante al reconocimiento de las prestaciones del régimen de prima media como consecuencia de la aplicación del principio de solidaridad pensional que ostenta los afiliados al régimen de prima media, y de manera adicional, en tanto fue la AFP quien tuvo el



manejo del dinero y por tanto obtuvo sus frutos **por más de 26 años**, y esto generaría un impacto en el PIB y en la reserva pensional.

En mérito de lo expuesto y con el fin de no vulnerar el equilibrio y sostenibilidad del sistema general de pensiones, en caso de declararse la nulidad del traslado es necesario no solo devolver las cotizaciones, con sus rendimientos, sino la totalidad de los recursos consignados y pagados por el afiliado en la AFP, como son: Los Recursos cuenta individual de ahorro, cuotas abonadas al FGPM, rendimientos, bonos pensionales, seguros Previsionales, cuotas de administración, mermas en la cuenta individual (Sentencias CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, CSJ SL 17595-2017, CSJ SL 4989-2018 y CSJ SL 1421-2019, rad. 56174), y también todos aquellos costos que debían ser sufragados al interior del RPM.

Teniendo en cuenta lo anterior y descendiendo al caso materia del litigio se encuentra que no medió por parte de la señora LUZ VICTORIA VASQUEZ HERNANDEZ, alguna solicitud de información que hiciera sobre su futuro pensional durante su vida laboral ya que no obra alguna prueba sumaria dentro del acervo probatorio, sustrayéndose así de sus deberes como afiliado al sistema general de pensiones y convalidando su deseo de permanencia en el RAIS, razones suficientes para estimar que resulta improcedente la declaratoria de nulidad y/o ineficacia solicitada dentro del presente proceso.

### **EXCEPCIONES DE MERITO**

#### **1. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA**

En el presente proceso es evidente que existe una falta de legitimidad en la causa por pasiva, respecto a mi representada, considerando que el Decreto 4121 de 2011, define el objeto de COLPENSIONES, así:

*“Artículo 2°. Objeto. De conformidad con el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007, la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, hace parte del Sistema General de Pensiones y tiene por objeto la administración estatal del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, las prestaciones especiales que las normas legales le asignen, y la administración del Sistema de Ahorro de Beneficios Económicos Periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005, en los términos que determine la Constitución y la ley, en su calidad de entidad financiera de carácter especial.”*

Y al solicitarse la nulidad del acto de afiliación suscrito entre el demandante y las AFP mencionadas, documento dentro del cual se establecen obligaciones y derechos para quienes intervienen dentro del mismo, esto de conformidad con el principio de relatividad jurídica, lo que implica la falta de legitimación en causa por parte de Colpensiones, quien para el caso es un tercero, frente al cual no se pueden generar efectos jurídicos ni favorables ni desfavorables, en la medida en que no ejerció derecho alguno dentro del trámite de afiliación con las AFP referida, el cual para el caso en estudio se produjo de manera voluntaria, libre, espontánea y sin presiones.

Razón por la cual la entidad llamada a responder por los derechos pensionales de la parte accionante es la AFP a la que se encuentra debida y válidamente afiliada.

#### **2. INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN**

Esta excepción se encuentra probada ya que no es procedente declarar la nulidad de la afiliación realizada por el accionante del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad bajo los argumentos expuestos en la oposición a las pretensiones y considerando que no se configuraron vicios en el consentimiento del accionante y que no es posible alegar la propia culpa, en este caso, el desconocimiento de la norma como excusa para la declaratoria de invalidez de un acto jurídico que ha venido produciendo plenos efectos entre las partes.

#### **3. ERROR DE DERECHO NO VICIA EL CONSENTIMIENTO.**

La presente excepción, se encuentra debidamente probada y solicito al despacho tenerla en cuenta, atendiendo a las siguientes consideraciones: La honorable Corte Constitucional, mediante sentencia C-993 de 2006, al realizar un exhaustivo estudio de constitucionalidad de los artículos 1509 y ss, llegó a la siguiente conclusión:

*(...) “En desarrollo del principio de seguridad jurídica, el ordenamiento civil colombiano adoptó el principio general del Derecho Romano según el cual la ignorancia del Derecho no sirve de excusa (iuris ignorantia non excusat), con la consecuencia de que el error de derecho perjudica (iuris error nocet). Así lo estableció en el Art. 9º del Código Civil, en virtud del cual “la ignorancia de las leyes no sirve de excusa” y en el Art. 1509 ibidem, una de las normas objeto de la demanda que se estudia, que dispone que “el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento”. Esto último significa que el error de derecho no da lugar a la declaración judicial de nulidad del negocio jurídico y que, por tanto, la parte de éste que lo cometió debe asumir todas las consecuencias de su celebración”. (...)*

En atención a lo ya expuesto, es claro que, tratándose de nulidad o ineficacia en la afiliación efectuada al RAIS, se relaciona a lo establecido en la legislación civil teoría del negocio jurídico, pues este trae como aspecto implícito e inherente de la acción, la voluntad de los contratantes, ahora bien, de lo pretendido en el libelo de la demanda, se puede establecer que, lo solicitado es la declaración de ineficacia o nulidad del contrato de afiliación suscrito con la AFP PROTECCIÓN S.A por lo que atendiendo al extracto jurisprudencial en cita, se puede establecer que en el presente caso el demandante, debe asumir las cargas de la suscripción del contrato.

De otra parte, debe tenerse en cuenta que a la luz del artículo 1754 del código civil, la nulidad relativa se puede sanear, por medio de convalidaciones tácitas, situación que se acompasa a lo establecido en el caso objeto de estudio, pues entre el momento de la afiliación al RAIS y la solicitud de traslado, transcurrió determinado tiempo, por lo que, atendiendo a la disposición mencionada, dicho negocio jurídico se encontraría debidamente convalidado. No obstante, lo anterior también es claro que en los términos del Decreto 2550 de 2010 correspondiente al Régimen de Protección al Consumidor Financiero, se establecieron obligaciones a la aquí demandante, quien ostenta la calidad de consumidor financiero, y quien a partir de la expedición de la norma en cita tenía el deber de informarse de las condiciones del sistema, de acuerdo a los mecanismos y plataformas habilitadas por cada entidad para sus afiliados, con el fin conocer las políticas, efectos legales, costos, restricciones, y derechos, por lo que el error de derecho en este caso se encuentra sin piso jurídico.

Finalmente, y para efectos de la superación del error de derecho es menester para cada proceso de nulidad de traslado, determinar la calidad de cada afiliado, en los términos de la sentencia SL 31989 de 2008, es decir, entre la categoría del afiliado lego y experto, que se establecerá de acuerdo con la capacidad intelectual y social de cada afiliado, que permitirá a su vez, determinar si el citado error de derecho existió.

#### **4. IMPOSIBILIDAD DEL TRASLADO**

Debe señalarse que el artículo 2º de la Ley 797 de 2003 establece la libre escogencia entre regímenes pensionales y también la posibilidad de trasladarse una vez cada cinco años contados a partir de la selección inicial, sin embargo, por razones financieras y de estabilidad en el sistema pensional, consagradas en el artículo 48 de la Constitución Política y en el Acto Legislativo 1 de 2005, esta norma limitó este derecho cuando al afiliado le faltare 10 años o menos para alcanzar la edad a pensión, salvo los afiliados que tuvieran 15 años cotizados a la entrada en vigencia del Sistema general de pensiones, para quienes se conservó el derecho a regresar al Régimen de Prima Media en cualquier momento, sobre el particular la Corte Constitucional en la Sentencia C-1024 de 2004 sostuvo lo pertinente en la sentencia C- 062 de 2010, en dichos fallos manifestó:

*(...) “El objetivo perseguido con el señalamiento del periodo de carencia en la norma acusada consiste en evitar la descapitalización del fondo común del régimen solidario de prima media, que se produciría si se permitiera que las personas que no han contribuido al fondo común y que por lo mismo no fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para determinar las sumas que representarían en el futuro el pago de sus pensiones y su reajuste económico, pudiesen trasladarse de régimen cuando estuviesen próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a desfinanciar el sistema y por ende poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes”(...*

Así las cosas, se encuentra que en el presente caso la parte actora se encuentra inmersa dentro de la prohibición del traslado como quiera que se encuentra a menos de 10 años del cumplimiento del requisito de edad y por lo tanto no es viable su retorno al régimen de prima media, en los términos que fue manifestado por mi defendida en las respuestas a las solicitudes presentadas.

## **5. PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS JURÍDICOS**

Se encuentra que el traslado efectuado por la parte actora se irradia de legalidad puesto que se prueba dentro del expediente con la suscripción del formulario de afiliación, que el mismo se realizó con plena voluntad del cotizante, quien por decisión propia solicitó el traslado suscribiendo el formulario que cumple con la totalidad de los requisitos legales de validez.

Así mismo se tiene que con lo aportado con la demanda no logra desvirtuarse la presunción de legalidad que opera sobre todos los actos jurídicos, puesto que no se acredita la configuración de vicios de consentimiento en la suscripción de la afiliación, vicios que se estipulan en el artículo 1109 del código civil, los cuales son: error, dolo, violencia, lesión o incapacidad al momento de suscribir el formulario de traslado con la AFP del Régimen de Ahorro Individual.

## **6. COBRO DE LO NO DEBIDO**

Se configura la excepción de cobro de lo no debido, teniendo en cuenta que como se argumentó en precedencia no concurren los elementos facticos ni jurídicos para la declaratoria de ineficacia y/o nulidad del traslado y por lo tanto la única entidad llamada a responder por los derechos previsionales del accionante en el Sistema General de Pensiones es la AFP PROTECCIÓN S.A a la que se encuentra debida y válidamente afiliado, razón por la que debe declararse probada la excepción de cobro de lo no debido en favor de mi representada.

## **7. BUENA FE DE COLPENSIONES**

Mi poderdante en el ejercicio de sus funciones siempre cumple lo establecido en la ley para cada caso en particular, bajo los parámetros fundamentales consagrados en nuestra Constitución política, por lo que todas y cada una de sus resoluciones se circunscriben al principio de buena fe exenta de culpa y del principio de legalidad, en los términos de la Sentencia C-1436 de 2000. Adicionalmente debe tenerse en cuenta por fallador de instancia que el principio de la buena fe se extiende hasta el momento del cambio del acto normativo o de cualquier orden judicial en los términos de la sentencia T-956 de 2011.

## **8. INOBSERVANCIA DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA PENSIONAL**

El artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, establece que las normas de carácter pensional deben asegurar la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

Bajo este entendido el artículo 2º de la Ley 797 de 2003 establece la libre escogencia entre regímenes pensionales y también la posibilidad de trasladarse una vez cada cinco años contados a partir de la selección inicial, sin embargo, por razones financieras y de estabilidad en el sistema pensional, esta misma norma limita este derecho cuando al afiliado le faltare 10 años o menos para alcanzar la edad a pensión, salvo los afiliados que tuvieran 15 años cotizados a la entrada en vigencia del Sistema general de pensiones, para quienes se conservó el derecho a regresar al Régimen de Prima Media en cualquier momento, sobre el particular la Corte Constitucional en la Sentencia C-1024 de 2004 sostuvo lo pertinente en la sentencia C- 062 de 2010, en dichos fallos manifestó:

*(...) "El objetivo perseguido con el señalamiento del periodo de carencia en la norma acusada consiste en evitar la descapitalización del fondo común del régimen solidario de prima media, que se produciría si se permitiera que las personas que no han contribuido al fondo común y que por lo mismo no fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para determinar las sumas que representarían en el futuro el pago de sus pensiones y su reajuste económico, pudiesen trasladarse de régimen cuando estuviesen próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a desfinanciar el sistema y por ende poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes"(...)*

Así las cosas, se puede determinar que en caso de condenarse a la nulidad del traslado se vulneraría el erario, en la medida en que el dinero depositado por el afiliado en la AFP, no contribuyó durante la cotización periódica del demandante al reconocimiento de las prestaciones del régimen de prima media como consecuencia de la aplicación del principio de solidaridad pensional que ostenta los afiliados al régimen de prima media, y de manera adicional, en tanto fue la AFP quien tuvo el manejo del dinero y por tanto obtuvo sus frutos por más de 10 años, y esto generaría un impacto en el PIB y en la reserva pensional.

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de no vulnerar el equilibrio y sostenibilidad del sistema general de pensiones, en caso de declararse la nulidad del traslado es necesario no solo devolver las cotizaciones, con sus rendimientos, sino la totalidad de los recursos consignados y pagados por el afiliado en la AFP, como son: Los Recursos cuenta individual de ahorro, cuotas abonadas al FGPM, rendimientos, bonos pensionales, seguros Previsionales, cuotas de administración, mermas en la cuenta individual (Sentencias CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, CSJ SL 17595-2017, CSJ SL 4989-2018 y CSJ SL 1421-2019, rad. 56174), y también todos aquellos costos que debían ser sufragados al interior del RPM.

#### **9. ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA**

Al respecto se encuentra que para que se configure el enriquecimiento sin justa causa, a voces de la Corte Constitucional (Sentencia No. T-219/95) deben concurrir los siguientes elementos:

- 1) Un enriquecimiento o aumento de un patrimonio;
- 2) Un empobrecimiento correlativo de otro, y
- 3) Que el enriquecimiento se haya producido sin causa, es decir, sin fundamento jurídico.

En este orden de ideas se encuentra que de accederse a los pedimentos de la demanda se estaría configurando un enriquecimiento sin justa causa por parte de las AFP relacionadas, que han venido recibiendo los aportes al sistema general de pensiones por parte del accionante, recibiendo la rentabilidad de los mismos y devengando emolumentos por virtud de gastos de administración entre otros, en contrario sensu, mi representada no tuvo la posibilidad por más de 10 años de obtener las cotizaciones y sus rentabilidades, y con mayor importancia bajo el principio de solidaridad que rige el RPM, contar con estos aporte durante el tiempo que dure el traslado, para el reconocimiento y pago de pensiones a los afiliados al régimen, y ahora con el paso del tiempo, se vería en la obligación de asumir todos los emolumentos que dejó de percibir, cubriendo los riesgos de invalidez, vejez y muerte del afiliado que se traslada, con base en el traslado del monto de los aportes y los rendimientos por parte de la AFP, generando así un empobrecimiento del patrimonio de mi defendida, que vendría a asumir el eventual pago de una mesada pensional sobre un afiliado que efectuó cotizaciones de manera periódica a otro fondo.

De igual forma, el enriquecimiento y empobrecimiento correlativo se presenta, en tanto la AFP devuelve el valor de los aportes y la rentabilidad que pudo tener el afiliado de haber continuado en el RPM, cuando lo que debe devolver es como mínimo la rentabilidad del RPM, pero si este fue superior deberá devolver todo aquella acreencia derivada de la cotización junto con cuotas abonadas al FGPM, rendimientos, bonos pensionales, seguros Previsionales, cuotas de administración, mermas en la cuenta individual, pues de lo contrario se generaría el enriquecimiento endilgado en este escrito.

#### **10. IMPROCEDENCIA DE COSTAS E INTERESES EN CONTRA DE COLPENSIONES**

Para el presente asunto no debe condenarse en costas a mi poderdante, teniendo que no forma parte de la relación contractual suscrita entre el demandante y la AFP, y que la existencia o la nulidad del trazado no son del resorte de Colpensiones, en tanto no puede ejercer derecho alguno respecto de la misma, no es de su competencia legal y el reconocimiento o no de prestación en el RPM solo es de su competencia siempre que se decreta la nulidad por lo que la codena en costas e intereses moratorios son improcedentes, como la ha determinado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sentencia del 06 de diciembre N°31314, en la que consideró: *“Las consecuencias de la nulidad no pueden ser extendidas a terceros, en este caso, a la administradora del régimen de prima media en el que se hallaba el actor antes de producirse la vinculación cuya nulidad se declara, de modo que no debe asumir por el sistema de pensiones sanciones derivadas de la mora en el pago íntegro del derecho pensional, obligaciones por las que sólo ha de responder a partir de cuando le sean trasladados los recursos para financiar la deuda pensional por parte de la entidad aquí demandada”*.

## 11. CONMUTACIÓN PENSIONAL.

Esta excepción tiene como finalidad que la AFP, en consideración al derecho que le asiste o le asistiría al demandante para el reconocimiento de pensión en el RPM en caso de la declaratoria de nulidad, pague a mi poderdante el costo total del reconocimiento de la pensión de vejez a que tendría derecho el demandante de haber continuado afiliado al RPM, con base en un cálculo actuarial que determine el valor total que debe asumir la AFP a favor de Colpensiones para el pago de la prestación, lo anterior con fundamento en el artículo 113 de la ley 100 1993, y en consideración del artículo 48 de la C.N en concordancia con el acto legislativo 1° de 2005, pues de no ser así se generaría un impacto económico negativo respecto del PIB y de la reserva pensional.

El cálculo actuarial en mención se solicita sea cubierto por parte de la AFP, en la medida en que la causal que por la cual se deriva la nulidad tienen procedencia en el ejercicio de sus funciones, y no sería justo que quien cubra los gastos y el pago de la prestación del demandante, tenga que hacerlo a cualquier costo, primando solo los intereses de la demandante, y no el de la totalidad de los afiliados al RPM y del mismo erario público.

Esta excepción también tiene fundamento en lo establecido en el artículo 10 del decreto 720 de 1994, donde se determina que las AFP en cumplimiento del deber de información tienen unas obligaciones y responsabilidades de reparar los daños que se ocasionen a los afiliados por cualquier error, infracción u omisión, que impliquen un perjuicio de los derechos de estos, como sucede en los casos de nulidad de traslado donde lo que se pretende es retomar el RPM con el fin de obtener una prestación económica mejor de la que se obtendría en la AFP, al efecto la norma establece:

*(...) "Cualquier infracción, error u omisión -en especial aquellos que impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados- en que incurran los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones en el desarrollo de su actividad compromete la responsabilidad de la sociedad administradora respecto de la cual adelante de sus labores de promoción o con la cual, con ocasión de su gestión, se hubiere realizado la respectiva vinculación sin perjuicio de la responsabilidad de los promotores frente a la correspondiente sociedad administradora del sistema general de pensiones."*  
(...)

## 12. PRESCRIPCIÓN.

Sin que de ninguna manera se entienda reconocidos los hechos y las pretensiones de la demanda, se propone la excepción de prescripción frente a cualquier derecho que eventualmente se hubiesen causado a favor de la demandante y que de conformidad con las normas legales, y con las pruebas aportadas al plenario se reconozca en la sentencia, causados con anterioridad a tres años, contados desde la presentación de la demanda, conforme lo establece el artículo 488 del C.S.T en concordancia con el artículo 151 del C.P.T.Y.S.S.

Sustento la presente excepción además de los artículos citados en precedencia en la jurisprudencia de la H corte constitucional, sentencia C-624 de 2003, y la sentencia de la H corte suprema de justicia sala de casación laboral, expediente L-8109-96 que me permitió transcribir en su aparte pertinente, así:

*(...) "No obstante, así reitero la corte, una vez más, la imprescriptibilidad del derecho a reclamar una pensión.*

*"pero, como ha sido objeto de aclaraciones en las anteriores oportunidades, la imprescriptibilidad de la pensión se refiere al derecho en sí mismo, pero no en lo atinente a las mesadas pensionales dejadas de cobra, las cuales se someten a la regla general de prescripción de las leyes sociales de tres (3) años, prevista en el artículo 151 de decreto -ley 2158 de 1948". (...)*

*(...) ahora bien, como la pensión de jubilación es vitalicia, la jurisprudencia laboral ha encontrado, con acierto, que el derecho a ella no prescribe, y que solo a las mesadas, una tras otra consideradas, puede aplicarse este medio de extinción de las obligaciones ". Corte suprema de justicia- sala de casación laboral, EXP L-8109-96 M.P German Valdés Sánchez. (...)*

## 13. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION

Ahora bien y sin que de ninguna manera se entienda reconocidos los hechos y las pretensiones de la demanda, se propone la excepción de prescripción frente a la acción que se pretende instaurar en este proceso de conformidad a lo preceptuado en el Artículo 2536 del código civil el cual nos habla de la prescripción de la acción ordinaria civil, ya que al ser un contrato comercial el realizado entre la demandante y la AFP, el que ahora se pretende demandar declarando la nulidad de este, se debe tener en cuenta que la actora contaba con un término de 10 años para realizar dicha acción,

so pena de declararse prescrita, como ocurrió en el presente caso en donde han pasado más de diez años desde el traslado de la demandante hasta la solicitud de declaratoria de nulidad, por lo que solicito se declare la prescripción de la acción respecto a la declaratoria de nulidad del traslado de régimen pensional ya que no se le está violando el derecho a la seguridad social ni adquirir una pensión pues la demandante sigue estando activa en el régimen de ahorro individual teniendo la posibilidad de adquirir pensión con la AFP que esta eligió.

#### **14. INNOMINADA O GENÉRICA**

De conformidad con lo establecido por el artículo 282 del C.G.P., solicito al Despacho que de encontrar probados hechos que constituyan excepción los declare probados a favor de mi poderdante.

#### **PRUEBAS**

Solicito se decreten las siguientes:

##### **DOCUMENTALES:**

Se tengan en cuenta los documentos que se aportan con la demanda y que hayan sido expedidos por mi representada y se tengan en cuenta las que se alleguen con este escrito así:

- Historia laboral actualizada del demandante
- Expediente administrativo del demandante en archivo adjunto.

##### **INTERROGATORIO DE PARTE.**

Por medio de la presente me permito solicitar se fije fecha y hora para que la demandante Sra. LUZ VICTORIA VASQUEZ HERNANDEZ., absuelva interrogatorio de parte que será formulado por el suscrito de manera verbal o escrita, el cual versará sobre los hechos de la demanda y su contestación.

##### **DE OFICIO.**

**oficiar a la AFP PROTECCIÓN S.A, en la cual se encuentra debidamente afiliado el Demandante, para que certifique lo siguiente:**

1. Si la demandante Sra LUZ VICTORIA VASQUEZ HERNANDEZ. ostenta la calidad de pensionado en dicho régimen privado, o si ya cumplió los requisitos que le otorgan el estatus pensionado pese a no encontrarse percibiendo aún la pensión.
2. Cuáles fueron todas las operaciones y contratos financieros que se celebraron y ejecutaron con terceros para consolidar el soporte financiero de la Sra. LUZ VICTORIA VASQUEZ HERNANDEZ y se alleguen los respectivos soportes que lo acreditan.
3. Se certifique y allegue los soportes atinentes al trámite de emisión y expedición de bonos pensionales en el caso de al demandante Sra. LUZ VICTORIA VASQUEZ HERNANDEZ

##### **OTRAS PRUEBAS OFICIOSAS**

Las que el Señor Juez considere decretar para obtener la certeza jurídica suficiente al momento de proferir Sentencia.

#### **ANEXOS**

1. Escritura pública No. 3371 del 02 de septiembre de 2019
2. Certificado de existencia y representación legal de SOLUCIONES JURIDICAS DE LA COSTA S.A.S.
3. Poder de sustitución debidamente otorgado.
4. Los documentos aducidos como pruebas.

## NOTIFICACIONES

COLPENSIONES se notifica en la Carrera 10 N° 16 – 19 Local 101 Edificio Bancolombia de BOGOTÁ D.C.

El suscrito apoderado se notifica en la Calle 17 No. 14 – 57 Oficina 202 de Duitama, teléfono 3106883690, correo electrónico [defensacolp.j3lct@gmail.com](mailto:defensacolp.j3lct@gmail.com) [abogadojulianrojas@gmail.com](mailto:abogadojulianrojas@gmail.com) o en la secretaría del Despacho

Atentamente,



**CARLO JULIAN ROJAS CAMARGO**

C. de C. No. 1052396663, de Duitama-Boyacá

T.P. No. 359499, C.S.J.

**COLPENSIONES Nit 900.336.004-7**  
**REPORTE DE SEMANAS COTIZADAS EN PENSIONES**  
**PERIODO DE INFORME: Enero 1967 agosto/2023**  
**ACTUALIZADO A: 10 agosto 2023**

**INFORMACIÓN DEL AFILIADO**

Tipo de Documento:	<b>Cédula de Ciudadanía</b>	Fecha de Nacimiento:	<b>05/10/1968</b>
Número de Documento:	<b>51913714</b>	Fecha Afiliación:	<b>18/11/1993</b>
Nombre:	<b>LUZ VICTORIA VASQUEZ HERNANDEZ</b>	Correo Electrónico:	
Dirección:	<b>CRA 33 NO 91A-46 INT 9 AP 302</b>	Ubicación:	
Estado Afiliación:	<b>Asignado al RAI por Decreto 3995/2008</b>		

**RESUMEN DE SEMANAS COTIZADAS POR EMPLEADOR**

En el siguiente reporte encontrará el total de semanas cotizadas a través de cada uno de sus empleadores o de sus propias cotizaciones como trabajador independiente, es decir, las que han sido cotizadas desde enero de 1967 a la fecha. Recuerde que la Historia Laboral representa su vida como trabajador, la que usted ha construido mes a mes y año a año.

[1]Identificación Aportante	[2]Nombre o Razón Social	[3]Desde	[4]Hasta	[5]Último Salario	[6]Semanas	[7]Lic	[8]Sim	[9]Total
1008300852	PRODUCCIONES MUNDIAL	18/11/1993	01/04/1994	\$123.210	19,29	0,00	0,00	19,29
1008211405	SERDAN S A	29/11/1994	31/12/1994	\$350.000	4,71	0,00	0,00	4,71
860068255	COMPAÑIA DE SERVICIO	01/01/1995	31/03/1995	\$350.000	12,86	0,00	0,00	12,86
860068255	COMPAÑIA DE SERVICIO	01/04/1995	31/12/1995	\$750.000	12,86	0,00	0,00	12,86
860068255	CIA DE SERV Y ADMIN	01/01/1996	31/01/1996	\$775.000	0,00	0,00	0,00	0,00
860068255	CIA DE SERV Y ADMIN	01/02/1996	29/02/1996	\$985.000	0,00	0,00	0,00	0,00
860068255	COMPAÑIA DE SERVICIO	01/03/1996	30/09/1996	\$892.000	0,00	0,00	0,00	0,00
860068255	SERDAN S A	01/11/1996	30/11/1996	\$892.000	0,57	0,00	0,00	0,57
860068255	CIA DE SERV Y ADMIN	01/12/1996	31/12/1996	\$446.000	0,00	0,00	0,00	0,00
860068255	SERDAN S A	01/01/1997	31/01/1997	\$149.000	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>[10] TOTAL SEMANAS COTIZADAS:</b>			
					<b>50,29</b>			
					<b>[11] SEMANAS COTIZADAS CON TARIFA DE ALTO RIESGO(INCLUIDAS EN EL CAMPO 10 - "TOTAL SEMANAS COTIZADAS"):</b>			
					<b>0,00</b>			

**RESUMEN DE TIEMPOS PÚBLICOS NO COTIZADOS A COLPENSIONES**

El siguiente resumen **INFORMATIVO** refleja los periodos laborados en el sector público y no cotizados al ISS hoy Colpensiones.

[12]Identificación Empleador	[13]Nombre o Razón Social	[14]Desde	[15]Hasta	[16]Último Salario	[17]Semanas	[18]Lic	[19]Sim	[20]Total
NO REGISTRA INFORMACIÓN								
						<b>[21]TOTAL SEMANAS REPORTADAS:</b>		

**RESUMEN TIEMPO PÚBLICO SIMULTÁNEO CON TRADICIONAL (67 - 94) Y POST 94**

El siguiente resumen refleja los periodos laborados que presentan simultaneidad, es decir aquellos en los que usted prestó servicios para varios empleadores en el mismo periodo de tiempo.

[22]Desde	[23]Hasta	[24]Semanas Simultáneas
NO REGISTRA INFORMACIÓN		
		<b>[25] TOTAL SEMANAS SIMULTÁNEAS:</b>

<b>[26]TOTAL SEMANAS (cotizadas[10] + reportadas tiempos públicos[21] - simultáneos[25] )</b>	<b>50,29</b>
---	--------------

Si usted laboró en entidades del sector público y estas entidades no cotizaron a pensiones al Instituto de Seguros Sociales (ISS), hoy Colpensiones, es posible que estos periodos no se vean reflejados en su reporte de Historia Laboral. De ser así, puede radicar la solicitud de inclusión de dichos periodos allegando la certificación Electrónica de Tiempos Públicos - CETIL expedida por su empleador, conforme al Decreto 726 de 2018 expedido por el Ministerio de Trabajo.

\* Los tiempos públicos tenidos en cuenta para la liquidación de una prestación económica decidida con anterioridad al 26/09/2017, no se visualizarán en el reporte de Historia Laboral.

Si ha trabajado en varias empresas al mismo tiempo, sólo se contabilizará en el total de semanas uno de los periodos y el salario base será la suma de lo cotizado, sin exceder



**COLPENSIONES Nit 900.336.004-7**  
**REPORTE DE SEMANAS COTIZADAS EN PENSIONES**  
**PERIODO DE INFORME: Enero 1967 agosto/2023**  
**ACTUALIZADO A: 10 agosto 2023**

**C 51913714 LUZ VICTORIA VASQUEZ HERNANDEZ**

el máximo asegurable al momento de solicitar el reconocimiento pensional.

Las semanas de los periodos de abril y mayo de 2020 con observación "Pago Decreto 558/2020 COVID 19", serán consideradas en el reconocimiento pensional para: Cumplir requisito de las 1300 semanas, Cuando se trate de una pensión de vejez con 1 SMLMV y para el otorgamiento de las pensiones de invalidez y muerte.

**DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS ANTERIORES A 1995**

Este reporte contiene el detalle de las semanas cotizadas hasta el 31 de diciembre de 1994.

[27] Identificación Empleador	[28] Nombre o Razón Social	[29] Ciclo Desde	[30] Ciclo Hasta	[31] Asignación Básica Mensual	[32] Días Rep.	[33] Observación
1008211405	SERDAN S A	29/11/1994	31/12/1994	\$ 350.000	33	Pago aplicado al periodo declarado
1008300852	PRODUCCIONES MUNDIAL LTDA	18/11/1993	01/04/1994	\$ 123.210	135	Pago aplicado al periodo declarado

**DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PARTIR DE 1995**

En el siguiente reporte encontrará el detalle de las semanas cotizadas a partir de enero de 1995 en adelante.

[34] Identificación Aportante	[35] Nombre o Razón Social	[36] RA	[37] Período	[38] Fecha De Pago	[39] Referencia de Pago	[40] IBC Reportado	[41] Cotización Pagada	[42] Cotización Mora Sin Intereses	[43] Nov.	[44] Días Rep.	[45] Días Cot.	[46] Observación
860068255	CIA DE SERV Y ADMIN SERDAN	NO	199501	24/02/1995	54046212000023	\$ 350.000	\$ 44.300	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860068255	CIA DE SERV Y ADMIN SERDAN	NO	199502	09/03/1995	56000201001972	\$ 350.000	\$ 44.600	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860068255	COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S	NO	199503	08/04/1995	51009201000795	\$ 350.000	\$ 44.200	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860068255	COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S	NO	199504	08/05/1995	51009201001191	\$ 750.000	\$ 93.700	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860068255	COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S	NO	199505			\$ 0	\$ 0	\$ 0		30	30	Deuda presunta, pago aplicado de periodos posteriores
860068255	COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S	NO	199505	09/06/1995	51009201001840	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0		0	0	*** Pago en Proceso de Verificación ***
860068255	COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S	NO	199506			\$ 0	\$ 0	\$ 0		30	30	Deuda presunta, pago aplicado de periodos posteriores
860068255	COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S	NO	199506	07/07/1995	51009201002362	\$ 750.000	\$ 0	\$ 0		0	0	*** Pago en Proceso de Verificación ***
860068255	CIA DE SERV Y ADMIN SERDAN	NO	199507	08/08/1995	51008501004141	\$ 750.000	\$ 93.800	\$ 100		30	0	Nombres no concuerdan con Registraduría
860068255	CIA DE SERV Y ADMIN SERDAN	NO	199508	07/09/1995	51006101003740	\$ 750.000	\$ 93.800	\$ 100		30	0	Nombres no concuerdan con Registraduría
860068255	CIA DE SERV Y ADMIN SERDAN	NO	199509	09/10/1995	51009201004179	\$ 750.000	\$ 93.800	\$ 100		30	0	Nombres no concuerdan con Registraduría
860068255	COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S	NO	199510	08/11/1995	51009201004730	\$ 750.000	\$ 94.200	\$ 500		30	0	Nombres no concuerdan con Registraduría
860068255	CIA DE SERV Y ADMIN SERDAN	NO	199511	15/12/1995	51009201005602	\$ 750.000	\$ 97.400	\$ 3.700		30	0	Nombres no concuerdan con Registraduría
860068255	CIA DE SERV Y ADMIN SERDAN	NO	199512	09/01/1996	51008501008438	\$ 750.000	\$ 76.400	-\$ 17.300		30	0	Nombres no concuerdan con Registraduría
860068255	CIA DE SERV Y ADMIN SERDAN	NO	199601	07/02/1996	51009201006290	\$ 775.000	\$ 104.600	\$ 0		30	0	Nombres no concuerdan con Registraduría
860068255	CIA DE SERV Y ADMIN SERDAN	NO	199602	13/03/1996	51006101008331	\$ 985.000	\$ 136.300	\$ 3.300		30	0	Nombres no concuerdan con Registraduría
860068255	COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S	NO	199603	12/04/1996	51009201007529	\$ 892.500	\$ 122.500	\$ 2.100		30	0	Nombres no concuerdan con Registraduría
860068255	CIA DE SERV Y ADMIN SERDAN	NO	199604	09/05/1996	51009201007976	\$ 892.500	\$ 121.600	\$ 1.200		30	0	Nombres no concuerdan con Registraduría
860068255	CIA DE SERV Y ADMIN SERDAN	NO	199605	14/06/1996	51009201008761	\$ 892.500	\$ 120.500	\$ 100		30	0	Nombres no concuerdan con Registraduría
860068255	CIA DE SERV Y ADMIN SERDAN	NO	199606	12/07/1996	51004401007090	\$ 892.500	\$ 120.200	-\$ 200		30	0	Nombres no concuerdan con Registraduría
860068255	CIA DE SERV Y ADMIN SERDAN	NO	199607	13/08/1996	51006901008754	\$ 892.500	\$ 122.900	\$ 2.500		30	0	Nombres no concuerdan con Registraduría
860068255	COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S	NO	199608	09/09/1996	50053601000099	\$ 892.500	\$ 6.200	-\$ 114.200		30	0	Nombres no concuerdan con Registraduría
860068255	CIA DE SERV Y ADMIN SERDAN	NO	199609	10/10/1996	51004401008736	\$ 892.500	\$ 118.800	-\$ 1.600		30	0	Nombres no concuerdan con Registraduría
860068255	CIA DE SERV Y ADMIN SERDAN	NO	199610	08/11/1996	51004401009377	\$ 892.500	\$ 0	\$ 0		0	0	*** Pago en Proceso de Verificación ***
860068255	SERDAN S A	NO	199611	09/12/1996	51004401009903	\$ 892.500	\$ 120.500	\$ 100		30	4	Pago aplicado al periodo declarado
860068255	CIA DE SERV Y ADMIN SERDAN	NO	199612	09/01/1997	51004401010520	\$ 446.250	\$ 60.800	\$ 600		30	0	Pago aplicado a periodos anteriores

**COLPENSIONES Nit 900.336.004-7**  
**REPORTE DE SEMANAS COTIZADAS EN PENSIONES**  
**PERIODO DE INFORME: Enero 1967 agosto/2023**  
**ACTUALIZADO A: 10 agosto 2023**

**C 51913714 LUZ VICTORIA VASQUEZ HERNANDEZ**

[34] Identificación Aportante	[35] Nombre o Razón Social	[36] RA	[37] Período	[38]Fecha De Pago	[39] Referencia de Pago	[40]IBC Reportado	[41]Cotización Pagada	[42]Cotización Mora Sin Intereses	[43] Nov.	[44] Días Rep.	[45] Días Cot.	[46]Observación
860068255	SERDAN S A	NO	199701	11/02/1997	51004401011333	\$ 148.750	\$ 20.500	\$ 0	R	17	0	Pago aplicado a periodos anteriores

**DETALLE DE PERIODOS REPORTADOS POR ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO QUE NO  
COTIZARON AL ISS HOY COLPENSIONES**

En el siguiente resumen encontrará el detalle por días, de los ciclos laborados en entidades del sector público que no cotizaron al ISS hoy Colpensiones.

[47] Identificación Empleador	[48] Nombre o Razón Social	[49] RA	[50]Ciclo	[51] Fecha de Pago	[52] Referencia de Pago	[53]Asignación Básica Mensual	[54]Cotización Pagada	[55]Cotización Mora Sin Intereses	[56] Nov.	[57] Días Rep.	[58] Días Cot.	[59]Observación
NO REGISTRA INFORMACIÓN												

C 51913714

LUZ VICTORIA VASQUEZ HERNANDEZ

### LECTURA DEL REPORTE DE LA HISTORIA LABORAL UNIFICADO

**Resumen de Semanas Cotizadas por Empleador:** este reporte contiene el total de semanas cotizadas a través de cada uno de sus empleadores o como trabajador independiente, es decir las que se han cotizado desde enero de 1967 a la fecha.

1. **Identificación aportante:** número que identifica al aportante según el sistema al que pertenece. Hasta diciembre de 1994 número patronal y a partir de 1995, Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería, etc.
2. **Nombre o razón Social:** nombre o razón social del aportante (empleador o trabajador independiente).
3. **Desde:** corresponde a la fecha de inicio del periodo de cotización.
4. **Hasta:** corresponde a la fecha final del periodo de cotización.
5. **Último salario:** salario reportado por el aportante. Para las cotizaciones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 1994, corresponde al último salario reportado y para las cotizaciones a partir de 1995 corresponde al salario reportado en el periodo desde-hasta.
6. **Semanas:** total de semanas correspondientes al periodo desde – hasta, sin descontar el tiempo de licencias y simultáneos.
7. **Licencias (Lic.):** refleja las licencias no remuneradas, es decir periodo no laborado ni remunerado. Este valor es descontado del total de semanas del periodo cotizado.
8. **Simultáneos (Sim.):** cantidad de semanas cotizadas de manera simultánea a través de dos o más aportantes.
9. **Total:** es el total de semanas cotizadas del periodo, menos las licencias no remuneradas y el tiempo cotizado de manera simultánea.
10. **Total de Semanas Cotizadas:** corresponde al total general de semanas cotizadas a la fecha de generación del reporte.
11. **Total de Semanas Cotizadas Alto Riesgo:** corresponde al total general de semanas cotizadas por tarifa de alto riesgo. Este total se encuentra incluido en el total de semanas cotizadas (campo 10 Total de Semanas Cotizadas.)

**Resumen de Tiempos Públicos no Cotizados a Colpensiones:** este reporte es informativo y refleja el total de semanas reportadas y laboradas en el sector público, los cuales no fueron cotizados al ISS hoy Colpensiones.

12. **Identificación empleador:** número que identifica la entidad empleadora con la cual tuvo relación laboral en el sector público.
13. **Nombre o razón Social:** nombre o razón social de la entidad empleadora.
14. **Desde:** corresponde a la fecha inicial del aporte realizado, según lo reportado por la entidad certificadora.
15. **Hasta:** corresponde a la fecha final del aporte realizado, según lo reportado por la entidad certificadora.
16. **Último salario:** corresponde al último salario reportado por la entidad certificadora.
17. **Semanas:** corresponde a las semanas del periodo desde – hasta, sin descontar el tiempo de licencias y simultáneos.
18. **Licencias (Lic.):** corresponde a las interrupciones laborales no remuneradas, reportadas por la entidad certificadora.
19. **Simultáneos (Sim.):** cantidad de semanas laboradas de manera simultánea, es decir a través de dos o más empleadores en el mismo periodo de tiempo.
20. **Total:** es el total de semanas reportadas del periodo, menos las licencias no remuneradas campo (7. Licencias (Lic.)).
21. **Total de Semanas Reportadas:** corresponde al total general de semanas reportadas a la fecha de generación del reporte.

**Resumen Tiempo Público Simultáneo con Tradicional (67 - 94) Y Post 94:** este reporte refleja el total de semanas laboradas simultáneamente entre el sector público y privado para los tiempos tradicionales (67-94) y Post 94.

22. **Desde:** corresponde a la fecha inicial de la simultaneidad.
23. **Hasta:** corresponde a la fecha final de la simultaneidad.
24. **Semanas simultáneas:** cantidad de semanas laboradas de manera simultánea, es decir a través de dos o más empleadores en el mismo periodo de tiempo.
25. **Total Semanas Simultáneas:** corresponde a la sumatoria total de semanas laboradas simultáneamente a la fecha de generación del reporte.
26. **Total Semanas:** corresponde a total semanas cotizadas más(+) total semanas reportadas menos(-) total semanas simultáneas reportadas y cotizadas a la fecha de generación del reporte.

**Detalle de pagos efectuados anteriores a 1995:** este reporte contiene el detalle de las semanas cotizadas hasta el 31 de diciembre de 1994.

27. **Identificación Empleador:** para los periodos anteriores a 1995 corresponde al número Patronal.
28. **Nombre o razón Social:** nombre o razón social del aportante (empleador o trabajador independiente).

C 51913714 LUZ VICTORIA VASQUEZ HERNANDEZ

- 29. **Ciclo Desde:** corresponde a la fecha de inicio del periodo de cotización.
- 30. **Ciclo Hasta:** corresponde a la fecha final del periodo de cotización.
- 31. **Asignación Básica Mensual:** salario reportado por el aportante. Para las cotizaciones efectuadas hasta 31 de diciembre de 1994, corresponde al último salario reportado.
- 32. **Días Rep.:** número de días trabajados y reportados por el aportante para el periodo registrado.
- 33. **Observación:** indica en que situación o estado se encuentra su periodo de cotización reportado.

**Detalle de pagos efectuados a partir de 1995:** este reporte contiene el detalle de las semanas cotizadas a partir de enero de 1995 en adelante.

- 34. **Identificación del aportante:** número que identifica al empleador o trabajador independiente (NIT, Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería, etc.).
- 35. **Nombre ó razón social:** nombre o razón social del aportante (empleador o trabajador independiente).
- 36. **RA:** indica si existe un registro de afiliación o relación laboral.
- 37. **Período:** año y mes al que corresponde el periodo cotizado.
- 38. **Fecha de pago:** fecha en que fue realizado el aporte.
- 39. **Referencia de pago:** número de registro del pago realizado (Calcomanía o Sticker o referencia de pago PILA).
- 40. **IBC Reportado:** es el salario (Ingreso Base de Cotización) declarado por el empleador o trabajador independiente, para el pago de la cotización.
- 41. **Cotización:** valor del aporte efectuado según el salario declarado en cada uno de los periodos.
- 42. **Cotización mora sin intereses:** es el dinero que el aportante adeuda por el periodo, sin incluir los intereses.
- 43. **Novedad(Nov.):** campo que indica con la letra "R", la novedad de Retiro reportada por el empleador.
- 44. **Días reportados:** número de días trabajados y reportados por el aportante en cada uno de los periodos.
- 45. **Días cotizados:** corresponde al número de días equivalentes al valor de la cotización pagada.
- 46. **Observación:** indica en que situación o estado se encuentra su periodo de cotización reportado.

**Detalle de periodos reportados por entidades del sector público que no cotizaron al ISS hoy Colpensiones:** este reporte contiene el detalle de las semanas reportadas por las entidades certificadoras.

- 47. **Identificación del aportante:** número que identifica la entidad empleadora con la cual tuvo relación laboral en el sector público.
- 48. **Nombre ó razón social:** nombre o razón social de la entidad empleadora.
- 49. **RA:** para el sector público esta información no es reportada por parte de la entidad certificadora. El campo siempre estará vacío.
- 50. **Ciclo:** año y mes al que corresponde el periodo reportado.
- 51. **Fecha de pago:** para el sector público esta información no es reportada por parte de la entidad certificadora. El campo siempre estará vacío.
- 52. **Referencia de pago:** para el sector público esta información no es reportada por parte de la entidad certificadora. El campo siempre estará vacío.
- 53. **Asignación Básica Mensual:** es el valor de la asignación básica mensual reportado por la entidad certificadora. En este reporte no se verán reflejados los demás factores salariales reportados por la entidad certificadora, sin embargo serán tenidos en cuenta al momento de la decisión de la prestación económica a que haya lugar.
- 54. **Cotización pagada:** para el sector público esta información no es reportada por parte de la entidad certificadora. El campo siempre estará en cero (0).
- 55. **Cotización mora sin intereses:** para el sector público esta información no es reportada por parte de la entidad certificadora. El campo siempre estará en cero (0).
- 56. **Novedad (Nov.):** para el sector público esta información no es reportada por parte de la entidad certificadora. El campo siempre estará en cero (0).
- 57. **Días reportados (Rep.):** número de días reportados por la entidad certificadora en cada uno de los periodos.
- 58. **Días cotizados:** para el sector público esta información no es reportada por parte de la entidad certificadora. El campo siempre estará en cero (0).
- 59. **Observación:** indica si el periodo se encuentra simultáneo con otro empleador. En caso en que se encuentre vacío, indica que el campo no es simultáneo.

#### Defensoría del Consumidor Financiero

Dirección: Calle 70A # 11-83 Bogotá.

Horario de atención: de 9:00 a.m. a 04:00 p.m. Jornada continua.

(57+601) 5439850, (57+601) 5439855 y 3203981187

Electrónico: [defensorcolpensiones@defensorialg.com.co](mailto:defensorcolpensiones@defensorialg.com.co)

**Agradecemos su confianza recordándole que estamos para servirle. Este reporte esta sujeto a revisión y verificación por parte de Colpensiones.**



SEÑORES

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA

E. S. D.

TIPO DE PROCESO: ORDINARIO LABORAL

DEMANDANTE: LUZ VICTORIA VASQUEZ HERNANDEZ

DEMANDADA: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES

RADICACION: 15001310500320230016200

Quien suscribe, **CARLOS RAFAEL PLATA MENDOZA**, abogado en ejercicio, identificado con la cédula de ciudadanía No. 84.104.546 de San Juan del Cesar y portador de la tarjeta profesional N° 107.775 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como representante legal de la firma SOLUCIONES JURIDICAS DE LA COSTA S.A.S.; de acuerdo a escritura pública otorgada a la firma que represento por parte de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, a usted comedidamente manifiesto que **SUSTITUYO** el poder que se me ha conferido con las mismas facultades otorgadas, en el (la) Doctor (a) CARLOS JULIAN ROJAS CAMARGO, quien es mayor y vecino (a) de esta ciudad, identificado (a) como aparece como aparece al pie de su firma; el cual tendrá iguales facultades a las mi conferidas y en señal de aceptación suscribe conmigo el presente escrito.

El apoderado general o el apoderado especial podrán actuar en forma separada o conjunta y lo harán en representación de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES** y con las mismas facultades.

Para efectos de notificaciones judiciales, las recibiré en el correo electrónico [abogadojulianrojas@gmail.com](mailto:abogadojulianrojas@gmail.com) y/o al celular 3106883690.

Con comedimiento,

**CARLOS RAFAEL PLATA MENDOZA**

Representante legal de Soluciones Juridicas de la Costa S.A.S.

C. de C. N° 84.104.546 de San Juan del cesar

T.P N° 107.775 C.S.J.

Acepto:

**CARLOS JULIAN ROJAS CAMARGO**

C.C. 1.052.396.663 de Duitama

T.P. 359499 del C.S. de la J.



# República de Colombia



SCOB16060448 SCCB17667849

NOTARIA NOVENA (9) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: 3371

TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO

FECHA DE OTORGAMIENTO:

DOS (2) DE SEPTIEMBRE

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019).

\*\*\*\*\*

## NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO

CÓDIGO	ESPECIFICACIÓN	VALOR ACTO
409	PODER GENERAL	SIN CUANTIA

\*\*\*\*\*

PERSONAS QUE INTERVIENEN \_\_\_\_\_ IDENTIFICACIÓN

PODERDANTE: \_\_\_\_\_

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Colpensiones \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ NIT. \_\_\_\_\_ 900.336.004-7.

APODERADO: \_\_\_\_\_

SOLUCIONES JURIDICAS DE LA COSTA S.A.S \_\_\_\_\_ NIT. 900.616.392-1

\*\*\*\*\*

En Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a los DOS (2) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019), ante el Despacho de la NOTARÍA NOVENA (9) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C., cuya Notaria titular es la Doctora ELSA VILLALOBOS SARMIENTO, se otorgó escritura pública que se consigna en los siguientes términos: \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

COMPARECIERON CON MINUTA ESCRITA Y ENVIADA: \_\_\_\_\_

Compareció el Doctor JAVIER EDUARDO GUZMÁN SILVA, mayor de edad, de nacionalidad colombiano, identificado con cédula de ciudadanía número 79.333.752 expedida en Bogotá, con domicilio y residencia en Bogotá, en su condición de Representante Legal Suplente de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Colpensiones EICE, con NIT. 900.336.004-7, calidad que acredita el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

SCOB16060448

SCCB17667849

QF8U8SMAH5N73ZGG  
YBDE07TANXSV86X

26/06/2019 01/08/2019

por la Superintendencia Financiera de Colombia, que se protocoliza a través de la presente escritura para que haga parte de la misma, sociedad legalmente constituida mediante Acuerdo No 2 del 01 de Octubre de 2009, manifestó que en aplicación de los artículos 440 y 832 del Código de Comercio y la Circular básica Jurídica Capítulo III Título I Parte 1, confiero poder general, amplio y suficiente a la sociedad **SOLUCIONES JURIDICAS DE LA COSTA S.A.S** con NIT **900.616.392-1**, legalmente constituida mediante documento privado del 30 de abril de 2013, debidamente inscrito el 10 de Mayo de 2016, bajo el número 254.645 del libro IX, según consta en la Certificado de existencia y Representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla, documento que se protocoliza con el presente instrumento público, para que en nombre y representación de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES Colpensiones NIT: 900.336.004-7**, celebre y ejecute los siguientes actos: -----

**CLÁUSULA PRIMERA.** – Obrando en la condición indicada y con el fin de garantizar la adecuada representación judicial y extrajudicial de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – Colpensiones EICE**, otorgo por el presente instrumento público **PODER GENERAL** a partir de la suscripción de la presente escritura a la sociedad **SOLUCIONES JURIDICAS DE LA COSTA S.A.S** con NIT **900.616.392-1**, para que ejerza la representación judicial y extrajudicial, tendiente a la adecuada defensa de los intereses de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – Colpensiones EICE** ante la Rama Judicial y el Ministerio Público, realizando todos los trámites, actos y demás gestiones requeridas en los procesos o procedimientos en los cuales la administradora intervenga como parte PASIVA, y que se adelanten en cualquier lugar del territorio nacional; facultad esta que se ejercerá en todas las etapas procesales y diligencias que se requieran atender ante las mentadas autoridades, incluidas las audiencias de conciliación judicial y extrajudicial. -----

El poder continuará vigente en caso de mi ausencia temporal o definitiva como Representante Legal Suplente de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – Colpensiones EICE**, con NIT: **900.336.004-7**, de conformidad con el inciso 6 del artículo 76 del Código General del Proceso, el cual establece que





# República de Colombia



SCC617667850 SCC617667850

NO 3371

"tampoco termina el poder por la cesación de las funciones de quien lo confirió como representante de una persona natural o jurídica, mientras no sea revocado por quien corresponda."

**CLÁUSULA SEGUNDA.** – El representante legal de la sociedad **SOLUCIONES JURIDICAS DE LA COSTA S.A.S** con NIT 900.616.392-1, queda expresamente autorizado, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso para sustituir el poder conferido dentro de los parámetros establecidos en el artículo 77 del Código General del Proceso, teniendo con ello facultad el apoderado sustituto para ejercer representación judicial y extrajudicial, de tal modo que en ningún caso la Entidad poderdante se quede sin representación judicial y extrajudicial, y en general para que asuma la representación judicial y extrajudicial de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – Colpensiones EICE**.

La representación que se ejerza en las conciliaciones sólo podrá adelantarse con sujeción a las directrices del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – Colpensiones EICE**.

**CLÁUSULA TERCERA.** – Ni el representante legal de la sociedad **SOLUCIONES JURIDICAS DE LA COSTA S.A.S** con NIT 900.616.392-1, ni los abogados que actúen en su nombre podrán recibir sumas de dinero en efectivo o en consignaciones por ningún concepto.

Queda expresamente prohibida la disposición de los derechos litigiosos de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – Colpensiones EICE** por parte del Representante legal y de los abogados sustitutos que actúen en nombre de la la sociedad **SOLUCIONES JURIDICAS DE LA COSTA S.A.S** con NIT 900.616.392-1, sin la autorización previa, escrita y expresa del representante legal principal o suplente de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – Colpensiones EICE** y/o del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de Colpensiones.

**CLÁUSULA CUARTA.** – Al Representante legal y a los abogados sustitutos que actúen en nombre de la sociedad **SOLUCIONES JURIDICAS DE LA COSTA S.A.S** con NIT 900.616.392-1, les queda expresamente prohibido el recibo o retiro de las órdenes de pago de depósitos judiciales que se encuentren a favor de la

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificaciones y documentos del archivo notarial

SCC617667850

SCC617667850

HHHR4LXC484D9HS  
2025KPTGXPVR5JMM

26/06/2019 01/08/2019



**ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – Colpensiones EICE. ----**

**\*\* HASTA AQUÍ LA MINUTA ENVIADA Y ESCRITA \*\***

\*\*\*\*\*

**ADVERTENCIA NOTARIAL**

- El notario responde de la regularidad formal del instrumento que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones de los interesados, tampoco responde de la capacidad o aptitud legal de éstos para celebrar el acto o contrato respectivo. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9° del Decreto Ley 960 de 1970. -----

**BASES DE DATOS**

De acuerdo a lo previsto en la Ley 1581 de 2012 Régimen General de Protección de Datos Personales y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013 se informa a los comparecientes que dentro del protocolo de seguridad adoptado por esta Notaría se ha implementado la toma de huellas e imagen digital de los otorgantes a través del sistema biométrico que se recoge por parte de la Notaría al momento del otorgamiento del presente Instrumento previa manifestación expresa de la voluntad de aceptación por parte de los intervinientes, conociendo que dicho sistema de control implementado por la Notaría tiene por objeto prevenir posibles suplantaciones, salvaguardar los instrumentos y la eficacia de los negocios jurídicos celebrados. -----

**El Notario advirtió a los comparecientes:**

- 1) Que las declaraciones emitidas por ellos deben obedecer a la verdad. -----
  - 2) Que son responsables penal y civilmente en el evento en que se utilice este instrumento con fines fraudulentos o ilegales. -----
  - 3) Que es obligación de los comparecientes **leer y verificar cuidadosamente el contenido del presente instrumento; los nombres completos, los documentos de identificación, los números de la matrícula inmobiliaria, cédula catastral, linderos y demás datos consignados en este instrumento.** —
- Como consecuencia de esta advertencia el suscrito Notario deja constancia que los comparecientes **"DECLARAN QUE TODAS LAS INFORMACIONES CONSIGNADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO SON CORRECTAS Y EN**



# República de Colombia



SCC416090450 SCC417687851

## Nº 3371

CONSECUENCIA, ASUMEN TODA LA RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE DE CUALQUIER INEXACTITUD EN LAS MISMAS". El Notario, por lo anterior, informa que toda corrección o aclaración posterior a la autorización de este instrumento, requiere el otorgamiento de una nueva escritura pública con el lleno de todas las formalidades legales, la cual generará costos adicionales que deben ser asumidos por los otorgantes conforme lo disponen los artículos 102, 103 y 104 del Decreto 960 de 1970

### OTORGAMIENTO

Conforme al artículo 35 del Decreto 960 de 1.970, el presente instrumento es leído por los comparecientes quienes lo aprueban por encontrarlo conforme y en señal de asentimiento más adelante lo firman con el/la suscrita(o) Notaria(o). Los comparecientes declaran que son responsables del contenido y de la vigencia de los documentos presentados y protocolizados para la celebración de este acto jurídico.

### AUTORIZACIÓN

Conforme al artículo 40 del Decreto 960 de 1.970, la (el) Notaria(o) da fe de que las manifestaciones consignadas en este instrumento público fueron suscritas por los comparecientes según la Ley y que dan cumplimiento a todos los requisitos legales, que se protocolizaron comprobantes presentados por ellos y en consecuencia autoriza con su firma la presente escritura pública.

Esta escritura se extendió en las hojas de papel notarial de seguridad identificadas: SCO816090448, SCO616090449, SCO416090450.

Derechos Notariales:	\$ 59.400
Retención en la Fuente:	\$ - 0
IVA:	\$ 23.093
Recaudos para la Superintendencia:	\$ 6.200
Recaudos Fondo Especial para El Notariado:	\$ 6.200

Resolución 0691 del 24 de enero de 2019, modificada por la Resolución 1002 del 31 de enero de 2019 de la Superintendencia de Notariado y Registro.

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del Archivo notarial

SCC416090450

SCC417687851

8SDGZYAH1WISPU5  
YYXH13EQSG9B6JV

26/06/2019 01:59:2019

**PODERDANTE**



**JAVIER EDUARDO GUZMÁN SILVA**

Actuando como representante Suplente de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE  
PENSIONES – Colpensiones EICE, con NIT. 900.336.004-7-----

C.C. No. 79.333.752

Teléfono ó Celular: 2170100 ext: 2458

E-MAIL: [poderesjudiciales@colpensiones.gov.co](mailto:poderesjudiciales@colpensiones.gov.co)

Dirección: Carrera 10 No. 72 – 33, Torre B, Piso 10 Ciudad: Bogotá D.C.

FIRMA FUERA DEL DEPACHO ARTICULO 2.2.6.1.2.1.5 DECRETO 1069 DE 2015

*Elsa Villalobos Sarmiento*  
NOTARIA NOVENA (9ª) DE BOGOTÁ  
*Elsa Villalobos Sarmiento*  
**ELSA VILLALOBOS SARMIENTO**

**NOTARIA NOVENA (9ª) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ F**



Generado el 26 de agosto de 2019 a las 11:35:19

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

## EL SECRETARIO GENERAL AD-HOC

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el numeral 10 del artículo 11.2.1.4.59 del Decreto 1848 del 15 de noviembre del 2016, en concordancia con el artículo 1° de la Resolución 1765 del 06 de septiembre de 2010, emanada de la Superintendencia Financiera de Colombia.

## CERTIFICA

NATURALEZA JURÍDICA: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

NATURALEZA JURÍDICA: Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo. Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Acuerdo No 2 del 01 de octubre de 2009. Se crea bajo la denominación ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES Colpensiones, tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C. La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, se crea como una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden nacional, vinculada al Ministerio de la Protección Social, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.

Acuerdo No 9 del 22 de diciembre de 2011. La Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio del Trabajo, con la finalidad de otorgar los derechos y beneficios establecidos por el sistema general de seguridad social consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia.

Oficio No 2012082076 del 28 de septiembre de 2012. La Superintendencia Financiera de Colombia no encuentra objeción para que Colpensiones inicie operaciones como Administradora del Régimen de Prima Media con prestación definida.

Decreto No 2011 del 28 de septiembre de 2012. Artículo 1. Inicio de operaciones. A partir de la fecha de publicación del presente decreto, la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones inicia operaciones como administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida. Artículo 2. Constituidos en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida de los afiliados y pensionados en Colpensiones. Los afiliados y pensionados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales (ISS), mantendrá su condición en la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, así como los derechos y obligaciones que tiene el mismo régimen. Los afiliados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por la Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom, mantendrán su condición, derechos y obligaciones que tienen, en el mismo régimen administrado por Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, sin que ello implique una selección o traslado de régimen de Sistema General de Pensiones. Artículo 3. Pensiones Causadas. Las pensiones de los afiliados a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom, causadas antes de la entrada en vigencia del presente decreto, serán reconocidas y pagadas por esta entidad, hasta tanto la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP y Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP), asuman dichas competencias.

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Decreto 2011 del 28 de septiembre de 2012

REPRESENTACIÓN LEGAL: La administración de la Administradora Colombiana de Pensiones - (Colpensiones), está a cargo del Presidente quien será su representante legal. Las ausencias temporales o definitivas del Presidente serán suplidas por el Jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Legales o por cualquiera de los Vicepresidentes de la entidad, siempre que cumplan con los requisitos del cargo. (Acuerdo 145 del 10 de

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.  
Comunidades: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01  
www.superfinanciera.gov.co

Página 1 de 3

Generado el 26 de agosto de 2019 a las 11:35:19

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

diciembre de 2018). FUNCIONES DEL PRESIDENTE. Son funciones del Despacho del Presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES, las siguientes: 1. Dirigir, coordinar, vigilar, controlar y evaluar la ejecución y cumplimiento de los objetivos, políticas, planes, programas y proyectos inherentes al desarrollo del objeto de COLPENSIONES, directamente, a través de tercerización, de procesos, mediante corresponsales o cualquier otro mecanismo que permita mayor eficiencia en la prestación del servicio, expidiendo los actos administrativos que se requieran para tal efecto. 2. Ejercer la representación legal de la Empresa. 3. Delegar o constituir apoderados especiales para la representación judicial y/o administrativa de COLPENSIONES. 4. Dirigir la formulación y ejecución de políticas y estrategias relacionadas con el manejo de la información y la comunicación externa y organizacional. 5. Dirigir las políticas, programas, planes y proyectos para el relacionamiento con los diferentes grupos de interés de COLPENSIONES y el cumplimiento de los objetivos institucionales. 6. Dirigir la gestión comercial de la Empresa que involucre el diseño de mercado, la divulgación y capacitación, la afiliación de nuevas personas y la administración y fidelización de quienes ya se encuentran afiliados. 7. Dirigir la gestión integral de servicio al cliente en caminata a la atención de los ciudadanos, empleadores, pensionados y demás grupos de interés que permitan satisfacer de forma efectiva, sus necesidades. 8. Impartir directrices para el diseño e implementación del Sistema de Administración Integral de Riesgos, de acuerdo a la normatividad legal vigente y someterlo a la aprobación de la Junta Directiva. 9. Dirigir las políticas que en materia de Gobierno Corporativo adopte COLPENSIONES. 10. Someter a consideración y aprobación de la Junta Directiva el proyecto anual de presupuesto, los proyectos de adición y traslados presupuestales, con arreglo a las disposiciones orgánicas y reglamentarias sobre la materia. 11. Presentar para aprobación de la Junta Directiva los estatutos de COLPENSIONES, sus modificaciones y las condiciones generales de carácter salarial y prestacional de los trabajadores oficiales de COLPENSIONES. 12. Presentar a consideración de la Junta Directiva y para aprobación del Gobierno Nacional, las modificaciones a la estructura y a la planta de personal de COLPENSIONES. 13. Someter a consideración y aprobación de la Junta Directiva los estados financieros y las operaciones de crédito de COLPENSIONES, de conformidad con las normas vigentes. 14. Someter a consideración y aprobación de la Junta Directiva el Código de Ética y Buen Gobierno, así como sus reformas o modificaciones, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, y disponer lo pertinente para su conocimiento y aplicación al interior de COLPENSIONES. 15. Desarrollar y dirigir el cumplimiento de las decisiones y acuerdos de la Junta Directiva, ejecutar y rendir los informes que le sean solicitados. 16. Dirigir la ejecución presupuestal, comprometer y ordenar el gasto, suscribir los actos y celebrar los contratos y convenios que se requieran para el normal funcionamiento de COLPENSIONES. 17. Nombrar y remover al personal de la Empresa que no corresponda a otra autoridad, dirigir los procesos de selección de personal, así como expedir los actos relacionados con la administración del mismo (tales como la distribución de personal, la suscripción y terminación de los contratos de trabajo, la expedición del manual de funciones y de competencias laborales y la creación o supresión de grupos internos de trabajo). 18. Vinculación de los Vicepresidentes y los Jefes de Oficina de la Empresa deberá contar con la aprobación previa de la Junta Directiva. 19. Proponer para aprobación de la Junta Directiva, previo estudio técnico, la creación, supresión o fusión de Gerencias, Direcciones, Subdirecciones y Direcciones Regionales que se requieran para el cumplimiento de las funciones de la Empresa. 20. Crear, modificar o suprimir puntos de atención y corresponsales que se requieran para el cumplimiento del objeto social. 21. Recomendar a la Junta Directiva la aceptación de cesiones y subrogaciones con Empresas Públicas. 22. Ejercer la función de control disciplinario interno en los términos de la Ley 734 de 2002 o en las normas que lo modifique, adicionen o sustituyan. 23. Dirigir las políticas para el fortalecimiento y mantenimiento de la cultura de autocontrol, y la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión Institucional. 24. Dirigir las políticas de control de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo y demás actividades ilícitas, aprobadas por la Junta Directiva de Colpensiones que sean necesarias para el cumplimiento de la Empresa. 25. Rendir informes solicitados por las entidades de inspección, control y vigilancia y las demás autoridades a las cuales se les deba reportar información. 26. Las demás inherentes a la naturaleza de la dependencia, las establecidas por la Ley, los reglamentos o los estatutos. PARAGRAFO TRANSITORIO. Facultar al Presidente de COLPENSIONES por única vez, para escoger y contratar de los servidores públicos que hoy ocupan cargos de Vicepresidentes y Directores de Oficina Nacional en forma permanente, que surtieron los procesos de selección propios de la Administradora y que fueron aprobados por la Junta Directiva, para ocupar los cargos de Vicepresidentes y Jefes de Oficina. (Acuerdo 146 del 01 de marzo de 2017).

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.  
Comunidades: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01  
www.superfinanciera.gov.co

Página 2 de 3

Generado el 26 de agosto de 2019 a las 11:35:19

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes personas:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Juan Miguel Villa Lora	CC - 12435765	Presidente
Jorge Alberto Silva Acero	CC - 19459141	Suplente del Presidente (Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Comercio, con información radicada con el número 2019001331-000 del día 8 de enero de 2019, la entidad informa que con documento del 17 de diciembre de 2018 renunció al cargo de Suplente del Presidente y fue aceptada por la Junta Directiva en Acta 01-2019 del 11 de enero de 2019. Lo anterior de conformidad con los efectos establecidos por la Sentencia C-321 de julio 29 de 2003 de la Constitución).
Oscar Eduardo Moreno Enríquez	CC - 12748173	Suplente del Presidente
María Elisa Moron Baute	CC - 49790026	Suplente del Presidente
Javier Eduardo Guzmán Silva	CC - 79333752	Suplente del Presidente

JOSÉ HERALDO LEAL AGUDELO  
SECRETARIO GENERAL AD-HOC

De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales.

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.  
Comunidades: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01  
www.superfinanciera.gov.co

Página 3 de 3

NOTARIA



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA



ES PRIMERA (1ª) COPIA DE LA ESCRITURA PUBLICA  
NUMERO 3.371 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2.019,  
TOMADA DE SU ORIGINAL QUE SE EXPIDE EN OCHO (08)  
HOJAS DEBIDAMENTE RUBRICADAS EN SUS MÁRGENES,  
CONFORME AL ARTÍCULO 79 DEL DECRETO 960 DE 1970.

CON DESTINO A: LOS INTERESADOS.

SE EXPIDE EN BOGOTÁ D.C., a los 03 de Septiembre de  
2.019.



**ELSA VILLALOBOS SARMIENTO**  
NOTARIA NOVENA (9) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ  
NOTA: CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACION QUE SE REALICE SOBRE ESTAS COPIAS ES ILEGAL Y  
UTILIZARLAS ASI ES UN DELITO QUE CAUSA SANCION PENAL.

NOTARIA 9 DEL CIRCULO DE BOGOTA

**ELSA VILLALOBOS SARMIENTO**  
Notaria

CERTIFICADO NÚMERO 312-2019  
COMO NOTARIA NOVENA (9ª) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

**CERTIFICO:**

Que por medio de la escritura pública número TRES MIL TRESCIENTOS  
SESENTA Y CINCO (3.365) de fecha DOS (02) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO  
DOS MIL DIECINUEVE (2.019) otorgada en esta Notaría, compareció el(la)  
señor(a) JAVIER EDUARDO GUZMAN SILVA, identificado(a) con la cédula de  
ciudadanía número 79.333.752 de Bogotá, en su condición de Representante  
Legal Suplente de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –  
Colpensiones EICE, confirió PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE, a la  
sociedad SOLUCIONES JURÍDICAS DE LA COSTA S.A.S., para que en su  
nombre y representación, celebre y ejecute las facultades y atribuciones allí  
consignadas.

Además CERTIFICO que a la fecha el PODER anterior se presume vigente, por  
cuanto en su original o escritura matriz NO aparece nota alguna que indique haber  
sido reformado o revocado parcial o totalmente.

Esta certificación de vigencia de poder NO sustituye la presentación física de la  
escritura pública que contiene el poder

Este certificado se expide con destino al INTERESADO  
Bogotá D.C., Tres (03) de Septiembre de dos mil diecinueve (2019)  
Elaborado por: Billy J. Jarama



**ELSA VILLALOBOS SARMIENTO**  
NOTARIA NOVENA (9) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.  
NOTA: CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACION QUE SE REALICE SOBRE ESTAS COPIAS ES ILEGAL  
Y UTILIZARLAS ASI ES UN DELITO QUE CAUSA SANCION PENAL.

República de Colombia



01/09/2019

VATBTLQJNEMASCHW



SCC317867859



República de Colombia



01/09/2019

DNVRSQSC2K21389FZ



SCC317867859



EN BLANCO  
NOTARIA NOVENA (9) DE BOGOTÁ